

LA MILITARIZACIÓN NORTEAMERICANA DE AMÉRICA LATINA

INTRODUCCIÓN

A 200 años de la independencia política de América Latina, el continente está atravesando por un proceso de cambio único en su historia: el desafío colectivo a la hegemonía norteamericana en la región. La gesta libertadora, liderada por Simón Bolívar, que fue un proceso más militar que político y que duró alrededor de tres décadas, culminó con el surgimiento de más de una veintena de repúblicas independientes, todas individualmente muy débiles, acarreando un pesado legado colonial de atraso y subdesarrollo cuya manifestación más palpable fue el ascenso al poder de una oligarquía o clase dominante esencialmente antinacional. Eduardo Galeano poéticamente captura su esencia con el siguiente aforismo:

“Incorporadas desde siempre a la constelación del poder imperialista, nuestras clases dominantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo podría resultar más rentable que la traición, o si la mendicidad es la única forma posible de la política internacional.”¹

Casi de forma inmediata luego de la independencia, las clases dominantes del continente se abocaron a convertir a las naciones que dominaron en feudos atrasados de los cuales obtenían renta externa y muy rápidamente se subordinaron a los poderes mundiales más potentes de las distintas fases de la evolución histórica de estos 200 años: después de las derrotas de España y Portugal, el continente sería subordinado primero por Inglaterra, luego, por Estados Unidos. Este último país, demostrando un alto nivel de conciencia como potencial poder regional hegemónico, cuya condición sine qua non era simultáneamente la expulsión de otros rivales colonialistas en el hemisferio y el sometimiento económico, político y, si fuese necesario, militar de sus vecinos del Sur, emitió la abominable ‘Doctrina Monroe’, en 1823, varios años antes de que la lid libertadora culminara. Y aunque su repetición la haya convertido en un cliché, la corrección de la prehensión de Simón Bolívar sobre

¹ Eduardo Galeano, *Las Venas Abiertas de América Latina*, Siglo XXI Editores, S.A. de C.V, México 2004, pág. 18.

el Coloso del Norte no ha perdido su vigencia en estos dos siglos de historia republicana de Nuestra América, cuando en una carta a Patricio Campbell, Encargado de Negocios de Su Majestad Británica, el 5 de agosto de 1829 desde Guayaquil expresara: "...los Estados Unidos que parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad..."²

Y más o menos desde el aciago día de la proclamación de la Doctrina Monroe, y de su corolario lógico, el Destino Manifiesto, Estados Unidos ha sometido a América Latina a una cadena de miserias que en el siglo XX no parecían tener fin.

"Durante casi un siglo, las distintas administraciones estadounidenses justificarán las más variadas agresiones abiertas o encubiertas contra los pueblos latinoamericanos, sin importar que para alcanzar sus objetivos de derrotar lo que ellos llamaban 'fuerzas extranjerizantes' se realicen masacres contra campesinos e indígenas, desapariciones forzadas o se impulse la política de tierra arrasada por parte de ejércitos aliados o grupos paramilitares con asistencia y entrenamiento estadounidense."

Henry Suarez, autor de esta cita, agrega que "En 185 años, los gobiernos estadounidenses han dirigido más de 159 acciones de diverso tipo y envergadura contra América Latina y el Caribe..."³ La relevancia de estas 'acciones de envergadura' es que muchas de ellas fueron de carácter militar, no sólo de redadas militares relámpago y/o apoyo militar a golpes de Estado, sino ocupación militar que en muchos casos duró años.⁴

La hegemonía norteamericana comenzó a debilitarse primero con la revolución cubana en 1959, pero, a pesar del desafío formidable que Cuba castrista representó para el dominio hemisférico norteamericano, pasarían cinco décadas de brutal afirmación de su poderío regional antes del desafío colectivo del presente siglo. Desde 1998, fecha de la elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, la situación geopolítica general del continente ha ido cambiando dramáticamente. A Chávez le siguió la elección a la presidencia de Brasil del trabajador metalúrgico y sindicalista, Ignacio Lula da Silva, en 2002, seguido a su vez por una cadena de presidentes progresistas, izquierdistas, o revolucionarios, todos antineoliberales como Néstor Kirchner en 2003 (Argentina), Tabaré Vázquez en 2004 (Uruguay), Evo Morales en 2005 (Bolivia), Michelle Bachelet en Chile

² Carta al Coronel Patricio Campbell, Encargado de Negocios de SMB, fuente: http://www.simon-bolivar.org/Principal/bolivar/catta_a_campbell.html

³ Henry Suárez, *Intervenciones de Estados Unidos en América Latina*, Manifiesto Press, Londres 2010, págs. 6-7.

⁴ EE.UU. invadió, por ejemplo, a Cuba en 1898 y mantuvo a la isla bajo ocupación militar hasta 1903; también invadió a Nicaragua por primera vez en 1912, y mantuvo una ocupación militar de ese país hasta 1933; en 1915 invadió a Haití, país al que mantendría bajo ocupación militar hasta 1934; y en 1919 invade a República Dominicana, país que mantiene bajo ocupación militar hasta 1924. Cronología intervenciones militares de EE.UU. en América Latina disponible en: <http://www.voltairenet.org/article125406.html>

y Rafael Correa (Ecuador), ambos elegidos en el 2006. La tendencia continuó con las reelecciones de Lula y Chávez (ambos en 2006), en Argentina con la elección de la esposa de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, y el sandinista Daniel Ortega, ambos en 2007, seguidos por Fernando Lugo (Paraguay) y Álvaro Colom (Guatemala), ambos en 2008, y recientemente, con la elección de José Mujica en 2009 en Uruguay y Mauricio Funes en El Salvador en el mismo año. Aunque con algunos altos y bajos (la elección de la derecha pinochetista en Chile en 2010, por ejemplo), una confirmación contundente de esta misma tendencia ha sido la elección de Dilma Rousseff, alta dirigente del Partido de los Trabajadores, ministra en el gobierno de Lula, y la primera mujer presidente del Brasil a fines de 2010. Debido a falta de espacio no podemos analizar desarrollos similares en el Caribe, en donde varias de las islas del Caribe inglés han elegido gobiernos radicales que buscan no sólo distanciarse de Estados Unidos sino que intentan integrarse económicamente con sus aliados naturales de América Latina.

Tampoco tenemos espacio aquí para analizar en detalle los efectos que la elección de tantos gobiernos antineoliberales ha tenido en la relación entre Estados Unidos y su “patio trasero”, pero sí se pueden señalar, en grandes líneas, varios efectos de significativa importancia. Primero, el otrora dominante Consenso de Washington ha sido substancialmente roto (o al menos significativamente dislocado) en la región, reduciendo de una manera histórica y sin precedentes la influencia e importancia de organismos multilaterales encargados de custodiar el consenso neoliberal en la región, como el FMI y el BM. Segundo, los organismos de hegemonía política norteamericana en la región, como la Escuela de las Américas, son una cosa del pasado, e incluso el mecanismo norteamericano favorito de ‘negociación’ hemisférica, la OEA, se ha debilitado substancialmente, primeramente debido a la enorme autoconfianza de la mayoría de las naciones al sur del Río Bravo, y también con el establecimiento de varios organismos regionales montados sin, y en algunos casos, contra Estados Unidos, como MERCOSUR, UNASUR, ALBA, El Grupo de Rio y, más recientemente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, organismo este último que explícitamente excluye a Estados Unidos y Canadá. Tercero, hay un proceso de integración regional bastante intenso en curso y que se manifiesta en una creciente multitud de acuerdos multilaterales y bilaterales de todo tipo y que abarcan cada vez mayores áreas de la economía, sociedad, cultura y política, lo que está redundado en un aumento cada vez más creciente del comercio intraregional, lo que a su vez incrementa la autosuficiencia de la región en relación a Estados Unidos. Cuarto, esta intensa actividad intraregional está cristalizando en instituciones con potencial de largo alcance, como Petrosur, Petroamérica, Petrocaribe y Banco del Sur, entre muchas otras, cuya significancia es precisamente aumentar la autosuficiencia de la región, así como su distanciamiento de Esta-

dos Unidos. Quinto, la tendencia generalizada de la región es a diversificar sus socios comerciales a costa de Estados Unidos, con una marcada orientación hacia Asia (especialmente China) lo que, además de mercados, ofrece créditos, inversión y tecnologías de punta. Y, finalmente, sólo para mencionar los aspectos más importantes de este desarrollo sin precedentes, tenemos la expulsión sostenida de la presencia militar norteamericana en países claves de la región, en los cuales se han cerrado ya varias bases militares norteamericanas (como Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc.), y en los cuales no hay presencia militar norteamericana de ningún tipo, desarrollo que se complementa con el establecimiento de CODESUR (Consejo de Defensa del Sur), una especie de OTAN sudamericana, que aunque embrionaria de momento tiene una significancia estratégica enorme y de largo alcance.⁵

De continuar estas tendencias, pese a la complejidad y enorme diversidad regional, tomado como un todo el continente ha desplegado niveles de autoafirmación y soberanía colectivas que en su proyección amenazan de manera grave la hegemonía de Estados Unidos en la región. Lo que complica aún más el panorama para el Coloso del Norte, es que EE.UU. está pasando por una crisis estructural que no tiene visos de solución a corto, o aun a mediano plazo. Todo esto, además de la pérdida de su influencia en el hemisferio, tiene intensamente preocupados a los estrategas de Washington, especialmente a los neoconservadores, además de amplios sectores del Pentágono.

Teniendo como punto de referencia el cuadro descrito más arriba, no deberían sorprender los intensos esfuerzos que realizan los sectores más conservadores del *establishment* norteamericano. Estos sectores utilizan varios pretextos para justificar el incremento de la presencia y posiciones militares norteamericanas en América Latina, expansión que sólo puede entenderse como el esfuerzo de tener las mejores condiciones de despliegue militar a nivel estratégico y geopolítico en la región para usarlas contra desarrollos políticos al Sur que, sin duda, percibe como amenazas graves a su posición de hegemonía regional. El objetivo de este artículo es examinar el alarmante proceso de la militarización norteamericana de la región.

UNA BASE MILITAR MENOS...SIETE BASES MÁS

Luego de la decisión del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de no renovar la licencia de la base aérea norteamericana en Manta⁶, instalada osten-

⁵ Nicolás Comini, *El rol del Consejo de Defensa de la UNASUR en los últimos conflictos regionales*, "Nueva Sociedad", núm 230, noviembre-diciembre, 2010, págs.14-22.

⁶ Se cree que el avión que lanzó el ataque contra el campo guerrillero de la FARC en territorio ecuatoriano –en el que su vocero internacional, Raúl Reyes y otras 24 personas perdieron la vida– despegó de la base aérea de Manta, en: Lucas Kintto, *ECUADOR: Manta Air Base Tied to Colombian Raid on FARC Camp*, IPS News, 21 de marzo de 2008, fuente: <http://ipsnews.net/news.asp?idnews=41687>

siblemente para combatir el narcotráfico, el gobierno de Obama se movilizó rápidamente para implementar un programa – de inspiración del Pentágono – cuyos alcances aumentaban masivamente la presencia militar de EE.UU. en Colombia. El Acuerdo de Cooperación de Defensa (ACD) entre Colombia y EE.UU. firmado el 30 de octubre de 2009 por una duración de 10 años, permitiría a Washington instalar siete bases militares en territorio colombiano. Pese a la reticencia, tanto por parte de EE.UU. como de Colombia, de dar información, los detalles del acuerdo militar salieron a la luz pública y lo que se reveló es muy preocupante. El establecimiento de las bases en Colombia ha puesto de relieve un patrón de expansión constante y considerable de la capacidad militar y de las posiciones geopolíticas de EE.UU. en la región. El ACD con Colombia ocurre apenas un año después del restablecimiento de la IV Flota destinada a operar en el Caribe y el Atlántico Sur, pero además precede un acuerdo similar con Panamá para establecer varias nuevas bases militares norteamericanas en ese país. Tales capacidades militares pueden ser desplegadas contra cualquier gobierno “antiestadounidense” en América Latina y el Caribe. La reacción de los líderes de la región ha sido simultáneamente de profunda preocupación y hostilidad, porque temen que EE.UU. podría estar preparándose para apoderarse por la vía militar de los valiosos recursos naturales que las naciones latinoamericanas poseen en grandes cantidades. El presidente de Brasil, Lula da Silva, por ejemplo, señaló, “La IV Flota me preocupa porque va a ir exactamente donde nosotros acabamos de descubrir petróleo”.⁷

Las siete bases militares que EE.UU. obtendría como parte del acuerdo de defensa con Colombia representaron un enorme, aunque totalmente injustificado desarrollo que parece estar dirigido primariamente contra Venezuela. El acuerdo se formuló en términos tan vagos y es de tan largo alcance que un respetado *think tank* norteamericano expresó que “... parece ser un acuerdo sin fronteras, permitiendo potencialmente a los militares norteamericanos llevar a cabo prácticamente cualquier misión contra prácticamente cualquier amenaza percibida.”⁸ Los países fronterizos a Colombia, Venezuela y Ecuador, en particular, tienen buenas razones para estar preocupados por el ACD: los gobiernos de estos países no sólo se han convertido en el blanco de la hostilidad de Washington y han sido regularmente señalados por la Casa Blanca y los medios de comunicación norteamericanos como los peores ene-

⁷ *Waiting for Change: Trends in U.S. Security Assistance to Latin America and the Caribbean*, the Center for International Policy, the Latin America Working Group Education Fund and the Washington Office on Latin America, “Just the Facts”, 24 de mayo de 2010, fuente: <http://justf.org/blog/2010/05/24/new-report-waiting-change>

⁸ Washington Office on Latin America, *Palanquero Base agreement: More Questions Than Answers*, 25 de noviembre de 2009, fuente: http://www.wola.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1025&Itemid=8

migos de la libertad y la democracia, sino que también han sido falsamente acusados de fomentar el narcoterrorismo y el tráfico de drogas.

La hostilidad de Washington ha ido mucho más allá de la mera propaganda. El Presidente Chávez en Venezuela, por ejemplo, sobrevivió un golpe de Estado en 2002, que tenía las huellas dactilares de Washington por todas partes; la oposición venezolana organizó un paro-sabotaje de la industria del petróleo que duró tres meses en 2002–2003, que casi llevó al colapso total de la economía, y que también llevaba la marca de Washington; y funcionarios venezolanos han señalado a Washington como el cerebro de un complot organizado por paramilitares colombianos para derrocar y asesinar a Chávez en 2004. El ataque militar colombiano contra Ecuador, en marzo de 2008, fue una violación sin precedentes de la soberanía territorial de un país de América Latina y altos funcionarios del gobierno colombiano lo justificaron como un ataque preventivo, posición ampliamente percibida como una aprobación de la doctrina de George W. Bush de la guerra preventiva. En este sentido, es difícil no interpretar los repetidos esfuerzos de poderosos sectores norteamericanos, tanto del *establishment* militar como político, de declarar a Venezuela narcoestado, auspiciador del terrorismo y de ser una amenaza para la seguridad energética de Estados Unidos, como deliberada estrategia orientada a la creación de un contexto que permita un ataque militar preventivo contra el gobierno del presidente Chávez. Así, pese a los pronunciamientos públicos de EE.UU. y de las autoridades colombianas en el sentido contrario, los hechos demuestran que EE.UU. – en complicidad con algunos de sus aliados regionales – ha decidido aumentar sus posiciones militares en la región, principalmente contra Venezuela, pero también contra países claves que forman parte de la oleada de gobiernos progresistas en la región.

EL ACUERDO DE DEFENSA ENTRE EE.UU. Y COLOMBIA

El Acuerdo de Defensa se firmó el 30 de octubre de 2009 y otorgaba acceso a las fuerzas armadas norteamericanas a siete bases militares colombianas por diez años.

Tres bases de la fuerza aérea serían abiertas a aviones de guerra y personal militar norteamericano:

- Alberto Powels, en la costa del Caribe en Malambo, Atlántico (que se adjunta al aeropuerto de Barranquilla), sede de la Fuerza Aérea Colombiana del 3er Comando de Combate;
- Capitán Luis Fernando Gómez Niño, en Apiay, Meta, unos 100 kilómetros al sureste de Bogotá, sede del Segundo Comando de Combate de la Fuerza Aérea Colombiana;

- Germán Olano Moreno, Palanquero en Puerto Salgar, Cundinamarca, a unos 100 kilómetros al noroeste de Bogotá, sede del Primer Comando de la Fuerza Aérea Colombiana.

Dos bases navales que serán abiertas a buques de guerra norteamericanos:

- ARC Bahía Málaga, en la costa del Pacífico en el Valle del Cauca;
- ARC Bolívar en Cartagena, en la costa del Caribe en Bolívar.

Y dos bases militares:

- Tolemaida (en el departamento del Tolima) en el centro oeste, en la región andina.

- Larandia (en el departamento de Caquetá), en la región Amazonas, sur de Colombia.

En julio de 2009, cuando se supo la noticia sobre el ACD en los medios de comunicación, “Altos funcionarios colombianos, que accedieron a hablar de las negociaciones sólo si sus identidades no eran reveladas, dijeron que el actual proyecto de acuerdo también especifica ‘visitas’ más frecuentes de buques de guerra de EE.UU. a dos bases navales en Bahía Málaga en el Pacífico y Cartagena en el Caribe. Colombia también podría recibir un tratamiento preferencial en las compras de armas y aviones.”⁹

Además, el ACD permitiría a EE.UU. el uso de instalaciones y lugares no especificados en Colombia que Washington pudiera requerir. Colombia debe permitir el acceso y uso de todas las demás instalaciones y lugares a las partes firmantes o los responsables de las operaciones relacionadas con el acuerdo.¹⁰

EE.UU. y las autoridades colombianas han negado enérgicamente que tropas norteamericanas estacionadas en esas instalaciones tendrían un papel de combate o participarían en hostilidades, y han insistido en que las instalaciones serían utilizadas exclusivamente para apoyar iniciativas de combate contra el narcotráfico y la contrainsurgencia en Colombia.

Es de suponer que, en apoyo a operaciones militares colombianas contra las guerrillas, la recolección de información probablemente sea la función principal para el personal norteamericano en las bases. “El Tiempo” informó¹¹ que “el acuerdo contempla que Colombia tendría acceso a información de inteligencia en tiempo real, recogida por los aviones que aterricen en las tres bases”.

Sin embargo, un documento de la Fuerza Aérea norteamericana (*Global En Route Strategy*) muestra que su misión irá “más allá de la lucha contra el nar-

⁹ Ethan Vesley-Flad, *US & Colombia discuss major military base agreement*, “For Peace”, 15 de julio 2009, fuente: <http://forpeace.net/blog/ethan-vesely-flad/us-colombia-discuss-major-military-bases-agreement>

¹⁰ Radio Sur, Especiales, *Tropas y funcionarios de EE.UU. tienen inmunidad en Colombia*, 4 de noviembre, 2009.

¹¹ “El Tiempo”, *Uribe defendió conveniencia de acuerdo de uso de bases colombianas por Estados Unidos*, fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/debate-nacional-por-autorizacion-a-estados-unidos-de-operar-desde-tres-bases-aereas-colombianas_5640970-1

costráfico para incluir la ‘lucha contra el terrorismo’”. Este documento presenta una explicación mucho más siniestra para explicar el fuerte financiamiento del Congreso norteamericano a la construcción de bases militares en Colombia. Se hace hincapié en la “oportunidad para la realización de operaciones de espectro completo por toda América del Sur” frente a la amenaza no sólo del tráfico de drogas y movimientos guerrilleros, sino también de ‘gobiernos anti-norteamericanos’ en la región.”¹² El documento no especifica a qué gobiernos antinorteamericanos se refiere, pero no es difícil imaginar que en la mira del Pentágono están principalmente Venezuela, seguida por Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

*Global En Route Strategy*¹³ inequívocamente especifica que la base militar de Palanquero se usará como plataforma de lanzamiento para operaciones militares no definidas en el continente en su conjunto:

“Recientemente, el Comando Sur se ha interesado en el establecimiento de un lugar en el continente sudamericano que podría ser utilizado tanto para operaciones antinarcóticos como un punto desde el cual operaciones de movilidad podrían ser ejecutadas. En consecuencia, con la ayuda de AMC y USTRANSCOM, el Comando del Sur se ha identificado a Palanquero, Colombia (Campo de Aviación Germán Olano, SKPQ), como un lugar de seguridad cooperativa (CSL). Desde esta ubicación, cerca de la mitad del continente puede ser cubierto por un C-17 sin recargar combustible. En caso de haber combustible adecuado disponible en el itinerario, un C-17 podría cubrir todo el continente con excepción de la región del Cabo de Hornos en Chile y Argentina. Hasta que el Comando Sur establezca un programa de teatro de combate más sólido, la estrategia de colocar un CSL en Palanquero debería ser suficiente para obtener movilidad aérea que abarque a todo el continente de América del Sur.”¹⁴

La Fuerza Aérea (*Estrategia Global en Ruta*) también señala que “El acceso a Colombia profundizará la asociación estratégica con Estados Unidos. La relación de cooperación en seguridad también ofrece una gran oportunidad para llevar a cabo operaciones de espectro completo por toda América del Sur para incluir el mitigar la capacidad para combatir contra el narcotráfico.” En otras palabras, a pesar de los repetidos desmentidos de Washington y Bogotá, las operaciones antinarcóticos no son la prioridad o el objetivo real del ACD. Su objetivo principal es la mejora de las operaciones militares de ‘espectro completo’ en toda América del Sur – no sólo en Colombia – a objeto de combatir la ‘amenaza constante’ de ‘los gobiernos antiestadounidenses’ en la región.¹⁵

¹² COHA Research Associates, Christina Esquivel and Paulina Serna, *Unsettling Revelations Regarding U.S. Lease of Colombian Military Bases*. Full details in Department of the Air Force, *Military Construction Program, Fiscal Year 2010 Budget Estimates*, Justification Data Submitted to Congress, may 2009, pág. 217.

¹³ *Global En Route Strategy*, págs. 20–21, fuente: <http://www.vtv.gob.ve/files/GlobalEnRouteStrategy.pdf>

¹⁴ UNSTRANSCOM (United States Transportation Command) es el Comando (Nacional) de Transportes (Militares), y AMC (Air Mobility Command), Comando de Movilidad (Militar) Aéreo.

¹⁵ El Departamento de Estado norteamericano publicó una declaración oficial sobre el ADC que se puede leer aquí: <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/aug/128021.htm>

Según la investigadora Eva Golinger “la completa inmunidad que el acuerdo proporciona al personal militar y civil norteamericano, incluidos los contratistas de defensa y seguridad privados, y la cláusula que autoriza a EE. UU. a utilizar cualquier instalación en todo el país – incluso los aeropuertos comerciales, con fines militares –, representan una renuncia completa de la soberanía colombiana y convierte formalmente a Colombia en un Estado cliente de EE.UU.”¹⁶

La solicitud del gobierno de Obama de presupuesto de defensa para 2010 ya incluye US \$ 46 millones (aprobado por el Congreso) para hacer mejoras de construcción a la base de Palanquero¹⁷ con el propósito explícito de “mejorar la pista de aterrizaje, las rampas asociadas y otras instalaciones en la base para transformarla en un lugar de seguridad cooperativa (CSL) norteamericana” a fin de convertirlo en un mecanismo de “operaciones de espectro completo en una sub-región de nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante por insurgencias terroristas financiadas por narcóticos, gobiernos anti-norteamericanos, pobreza endémica y frecuentes desastres naturales.”¹⁸

Aunque las palabras “gobiernos antinorteamericanos” fueran posteriormente removidas del documento por la Fuerza Aérea de EE.UU. y el documento mismo fuera finalmente retirado completamente, ningún otro pronunciamiento ha sido hecho por Washington, que sugiera objetivos estratégicos diferentes, por lo tanto, sólo puede concluirse que el carácter estratégico del acuerdo sigue sin cambios, a saber, “la realización de operaciones de espectro completo por toda América del Sur” frente a amenazas no sólo como el tráfico de drogas y movimientos guerrilleros, sino también de “gobiernos anti-Estados Unidos en la región.”

El ACD fue mantenido en secreto hasta que un artículo en la revista colombiana “Cambio”, llamó la atención a los US \$ 46 millones asignados por la Cámara de Representantes norteamericana para modernizar la base Palanquero.

Fueron la intensa actividad diplomática y la enorme presión ejercida por UNASUR (Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela fueron particularmente ruidosos, exigiendo públicamente los detalles del acuerdo con

¹⁶ Eva Golinger, *Official US Air Force Document Reveals the True Intentions Behind the US-Colombia Military Agreement*, “Global Research”, 6 de noviembre de 2009, fuente: <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15951>

¹⁷ Department of Defence, *Fiscal Year 2010 Budget Request Summary Justification*, pág. 9.

¹⁸ Un reportaje de Al Jazeera Fault Lines, *U.S. Colombia Base Agreement*, fuente: <http://www.youtube.com/watch?v=sZow3x646cE>, sostiene que durante su estadia en Colombia una nueva versión del documento de la Fuerza Aérea de los EE.UU. *Global En Route Strategy* apareció, en la cual las referencias a los ‘gobiernos anti-norteamericanos’ habían sido omitidas y que el compromiso de que las actividades norteamericanas fuera de Palanquero estarían basadas en el ‘respeto total a los principios de la soberanía, integridad territorial de los estados y a la no-intervención’, había sido agregado.

Colombia sobre las bases militares), que llevó a que se divulgara información al respecto. Al principio, tanto EE.UU. como Colombia rechazaron de plano dar ninguna información acerca del ACD. A principios de julio de 2009, Associated Press informó que “La mayoría de los detalles de las negociaciones son secretas, pero altos funcionarios militares y civiles de Colombia familiarizados con las negociaciones dijeron a Associated Press que la idea es hacer de Colombia un centro regional de operaciones del Pentágono – aunque sin exceder un máximo de 1.400 militares y contratistas norteamericanos establecidos por el Congreso de EE.UU.”¹⁹ Colombia incluso se negó a asistir a la cumbre de UNASUR, convocada para el 27 de noviembre de 2009, para discutir el tema de las bases militares a pesar de que las noticias acerca de las bases habían trascendido con cinco meses de anterioridad. En una cumbre de UNASUR anterior, celebrada a fines de agosto de 2009, 11 de sus 12 miembros expresaron reservas acerca del ACD (Colombia fue la única disidente). El embajador norteamericano en Colombia, William Brownfield, buscando amortiguar las críticas, dijo: “No vamos a tratar de ejecutar operaciones regionales desde Palanquero.” Pero esto no redujo la alarma de la región sobre el acuerdo, lo que llevó al presidente Uribe a embarcarse en una gira frenética de cinco países latinoamericanos (Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, pero no Venezuela), en la que no logró convencer a los presidentes de que no había motivo de alarma.

Sin embargo, a pesar de los estridentes desmentidos, el hecho es que “aviones AWACS y Orión ya están utilizando bases colombianas así como instalaciones en Panamá y El Salvador (para vuelos de espionaje, y también en Curazao para vuelos similares en el Caribe).”²⁰ Además, el documento de la Fuerza Aérea ‘Programa de Construcción Militar Año Fiscal Presupuesto 2010’ reitera que Palanquero “amplía la capacidad de guerra expedicionaria” y ofrece “una oportunidad para conducir operaciones de espectro completo.” El documento también insiste que Palanquero “[ofrece] acceso a todo el continente de América del Sur.”²¹

El ACD se mantuvo como secreto no sólo del resto de las naciones de América Latina, sino que a Colombia misma se le mantuvo en la oscuridad. La razón fundamental es que el acuerdo militar es incompatible con la Constitución colombiana de 1991, que establece que el estacionamiento de tropas extranjeras debe establecerse por tratado o convenio internacional. Por otra parte, estas decisiones, incluso si se adhiriesen a principios constitucionales,

¹⁹ U.S. and Colombia discuss major military bases agreement, 15 de Julio de 2009, fuente: <http://forpeace.net/blog/ethan-vesely-flad/us-colombia-discuss-major-military-bases-agreement>

²⁰ Colombia and the United States. Off base. Hoist on the petard of a dissuasive defence agreement, “The Economist”, 3 de diciembre de 2009, fuente: http://www.economist.com/world/americas/displaystory.cfm?story_id=15019912

²¹ Fuente: <http://www.saffm.hq.af.mil/shared/media/document/AFD-090511-049.pdf>

requieren la aprobación del Congreso colombiano, además de una decisión del Tribunal Constitucional. El ACD no cumplió con nada de esto. El Consejo de Estado de Colombia reunido en pleno emitió un documento, el 13 de octubre de 2009, en el que sostiene que el ACD es a la vez “demasiado amplio y demasiado desproporcionado para el país.” El Consejo de Estado fue aún más lejos señalando que, por la forma en que el acuerdo se había elaborado, “EE.UU. determina que va a ser transportado, y Colombia sólo coopera.” Añadió que era necesario especificar los alcances del acuerdo, así como el protocolo y los procedimientos para la entrada, sobrevuelo y aterrizaje de aviones norteamericanos en suelo colombiano. Tampoco veía razones válidas para que EE.UU. estableciera estaciones de recepción de satélite para la difusión de radio y televisión sin licencia, ni permiso específico, ni concesión y ni costo alguno. La autorización concedida fue amplia y sin restricciones de ningún tipo, sin embargo, el art. 75 de la Constitución estipula que el espacio electromagnético es un bien público, inalienable y sujeto a la gestión y control del Estado. Tampoco el Consejo consideró correcto dejar a la discreción norteamericana “la participación de observadores aéreos de terceros países.” Se cuestionó también la expedición de visas preferenciales, permitiendo a personal norteamericano entrada y estancia en Colombia sin necesidad de pasaporte o visado, así como también que se eximiera del pago del alquiler por el uso de las instalaciones de propiedad colombiana necesarias para implementar el ACD. El Consejo lamentó que si cualquier funcionario norteamericano fuera a cometer un delito durante su estadía en territorio colombiano, sería juzgado conforme a las leyes norteamericanas y no a las leyes colombianas. Por último, el Consejo recomendó que el ACD sea convertido en un tratado internacional con todas las exigencias de la ley y sea sometido al control normal de las instancias democráticas nacionales, como el Congreso y la Corte Constitucional.²² El gobierno de Uribe se opuso a la adopción de medidas para garantizar la transparencia y el control democrático del ACD en Colombia. Además, la Corte Constitucional de Colombia decidió revisar el acuerdo, aceptando una demanda de un grupo de defensores de derechos humanos que pidieron anular el acuerdo militar, por no haber sido aprobado por el Congreso, según lo dispuesto en la Constitución.²³ Finalmente, el 17 de agosto de 2010, la Corte Constitucional de Colombia sacudió a la clase política del país al declarar

²² *Acuerdo militar con Estados Unidos es ‘desbalanceado’ para el país*, “El Espectador”, 30 de octubre de 2009, fuente: <http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso169430-acuerdo-militar-estados-unidos-desbalanceado-el-pais>; the actual document of the Council of State can be read here (in Spanish): <http://static.elespectador.com/especiales/2009/10/1955bfe56d6e4bfb4a7516ef573dee1d/script/facsimil.pdf>

²³ *Waiting for Change: Trends in U.S. Security Assistance to Latin America and the Caribbean*, *op. cit.*, pág. 4.

que el ACD entre EE.UU. y Colombia era inconstitucional.²⁴ Sus repercusiones se sintieron con intensidad en Washington y fueron recibidas con mucho agrado en la mayoría de las capitales de América Latina, particularmente, en Caracas.²⁵

El 28 de julio de 2009, a medida que los informes de prensa sobre el ACD crecían, los Senadores Chris Dodd (Connecticut-D) y Patrick Leahy (Vermont-D) tomaron el paso sin precedentes de escribir formalmente a la Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, para quejarse por la falta de información que el gobierno había puesto a disposición del Congreso norteamericano: “A pesar de las evidentes consecuencias en política exterior y presupuestarias de dicho acuerdo, ni el Comité de Relaciones Exteriores, ni el Departamento de Estado, ni el Subcomité de Operaciones Exteriores del Comité de Asignaciones fueron informados de las negociaciones, y mucho menos consultados. Incluso después de que informes de prensa divulgaron su existencia, se admitió que había habido negociaciones sólo en respuesta a consultas específicas.” Los senadores añadieron: “¿Cuánto tiempo han estado las negociaciones en marcha, y por qué no hubo consulta con los mencionados Comités del Congreso o con expertos de ONGs en Colombia? ¿Fue la falta de consulta tan intensa en el lado colombiano, y, si lo fue, juzgó el Departamento de Estado, o estuvo de acuerdo con el juicio del gobierno colombiano, de que no debe haber ninguna consulta en el lado colombiano tampoco?”

Finalmente, después de meses de inquietud y de presión de los gobiernos latinoamericanos, especialmente a través de UNASUR, el gobierno colombiano publicó el texto del acuerdo, el 3 de noviembre de 2009.²⁶ Los temores y preocupaciones de la mayoría de los países de América Latina no se han calmado, lo que les ha llevado a acelerar el establecimiento de CODESUR, (Consejo de Defensa del Sur), cuyo objetivo es hacer que la subordinación militar, y los acuerdos militares de la región con EE.UU. sean superfluos.²⁷

²⁴ “Semana”, 17 de agosto de 2010, fuente: <http://www.semana.com/semana/noticias-nacion/corte-constitucional-dijo-no-acuerdo-militar-estados-unidos/143165.aspx>

²⁵ Lea todos los detalles respecto de la declaración de inconstitucionalidad del acuerdo de defensa en: “Semana”, *Abrecé de la decisión de la Corte Constitucional sobre las bases militares*, 18 de agosto de 2010.

²⁶ *Supplemental Agreement for Cooperation and Technical Assistance in Defense and Security Between the Governments of The United States of America and the Republic of Colombia*, fuente: <http://justf.org/content/supplemental-agreement-cooperation-and-technical-assistance-defense-and-security-between-gov>

²⁷ Medidas hacia la total independencia militar y tecnológica de EE.UU. ya han sido tomadas por Venezuela, Bolivia, e incluso, Brasil. El Presidente Lula ha establecido un acuerdo con Francia y Alemania, no con EE.UU. como ha sido el caso tradicionalmente, una compra gigantesca de equipo militar para renovar el equipamiento militar del país, UPI, *Brazil, France seal military partnership with major arms deal*, fuente: http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2009/09/08/Brazil-France-seal-military-partnership-with-major-arms-deal/UPI-74371252442408/

En agudo contraste, Brasil – demostrando que la renuencia a aceptar bases militares norteamericanas en su territorio nacional de ninguna manera significa la negativa a cooperar con EE.UU. para luchar contra el narcotráfico – el 10 de abril de 2010, firmó un Acuerdo de Cooperación para la Defensa con EE.UU., pero que se centra principalmente en “protocolos para futuras visitas de personal militar norteamericano,” pero está muy lejos del ACD entre Estados Unidos y Colombia, ya que de ninguna manera implica “acceso norteamericano a bases militares de Brasil, ni la presencia de tropas norteamericanas, ni compromiso de defensa común, ni inmunidad para el personal norteamericano”.²⁸

BASES MILITARES NORTEAMERICANAS EN AMÉRICA LATINA

En total, con la bases en Colombia, EE.UU. habría tenido cerca de 37 instalaciones militares en América Latina, muchas de las cuales pueden convertirse en plataformas para aventuras militares norteamericanas en la región. Representan un sistema complejo e integrado de instalaciones militares que, como en otras partes del mundo, son una extensión del poderío militar norteamericano y el mecanismo último de intervención de EE.UU. contra regímenes políticos o gobiernos que considera hostiles o enemigos. Son responsabilidad del Comando Sur y, desde su reciente retirada de las instalaciones militares en Panamá, en 1999, como consecuencia del Tratado Torrijos-Carter, EE.UU. decidió hacer de Colombia el eje de su aparato militar en su patio trasero.

EE.UU., persiguiendo los objetivos del Plan Colombia, ostensiblemente, para erradicar los cultivos de coca, el narcotráfico y lo que llama narcoterrorismo, comenzó un proceso de propagación de instalaciones militares en toda la región y que han sido aceptadas por algunos líderes regionales – muchas veces reaciosamente – pues suelen enfrentarse a la oposición vigorosa de movimientos sociales locales (algunos creados con el propósito específico de oponerse a las bases militares norteamericanas).

• Luego del retiro de Panamá, EE.UU. reconcentra sus tropas y comandos militares en Puerto Rico, pero una oposición masiva obligó a la Marina norteamericana a abandonar el campo de tiro en Vieques (2003), seguida por el cierre de la masiva estación naval de Roosevelt Roads, así como sacar de Puerto Rico los cuarteles generales del Ejército, la Armada y las Fuerzas Especiales y llevarlas a Texas y Florida (el comando conjunto del Comando Sur está en Miami). Sin embargo, la Marina norteamericana utiliza Vieques para prácticas “de largo alcance” y para submarinos, y el Ejército norteamericano tiene acceso a un campo de tiro grande, el Campamento Santiago, en Salinas.

²⁸ *Waiting for Change: Trends in U.S. Security Assistance to Latin America and the Caribbean*, op. cit., pág. 5.

- EE.UU. tiene tres ‘localidades de seguridad cooperativa’: Reina Beatriz en Aruba, Hato Rey en Curazao y Comalapa en El Salvador (Manta era un CLS).

- EE.UU. también tiene una estación de rastreo de misiles en la Isla Ascensión en el Caribe, una estación de radar en Costa Rica, y la base militar Soto Cano en Palmerola, Honduras, que desde 1984 ha prestado apoyo a misiones de entrenamiento y helicópteros (y, más recientemente, al derrocamiento del presidente elegido democráticamente en ese país).

- EE.UU. tiene también pequeñas instalaciones militares y propiedades en Antigua, Perú, Colombia, y en la isla de Andros en las Bahamas. El ejército norteamericano usó oficinas en Venezuela por más de 50 años, pero fue desalojado de allí en mayo de 2004. Desde entonces, tiene la base naval de Guantánamo, Cuba. El Comando Sur también opera alrededor de 17 sitios de radar, sobre todo en Perú y Colombia, los que normalmente cuentan con unas 35 personas.²⁹

- EE.UU. también utiliza habitualmente las instalaciones de Vasco Núñez de Balboa, Rodman, la antigua Estación Naval norteamericana, que es ahora sede de la guardia costera de Panamá, para el abastecimiento y reabastecimiento de combustible.³⁰ Por otra parte, en diciembre de 2009, el nuevo gobierno pro-EE.UU. de Martinelli, acordó “establecer 11 bases antinarcóticos, que son utilizadas estrictamente por las autoridades panameñas, pero abiertas a actividades de inteligencia norteamericana, en ambas costas del Istmo” (las bases son Bahía Piña, Mensabé, Isla del Coco, Isla de Coiba y Quebrada de Piedra, en el Pacífico, y Rambala, Isla Colón, Puerto Obaldía, Sherman y El Porvenir, en el Atlántico).³¹

La estrategia militar norteamericana se controla desde el Comando Sur con sede en Key West, Florida, y “Algunos analistas creen que el Comando Sur se ha convertido en la principal fuente de diálogo con los gobiernos de América Latina, así como el organismo que expresa la política exterior y de defensa norteamericanas en la región. El Comando Sur tiene más empleados trabajando en América Latina que los Departamentos de Estado, Agricultura, Comercio, Tesoro y Defensa” juntos.³²

A través de bases militares EE.UU. también realiza actividades contra la guerrilla. En Colombia, tiene una fuerza de 1.600 entre tropas y contratistas privados que desempeñan actividades dentro de los parámetros del Plan Colombia. Este Plan se puso en marcha principalmente en los departamentos

²⁹ Helga Serrano, *Anti-Bases Coalition Pushes U.S. Military Base out of Ecuador*, Americas Programme, 5 de noviembre de 2008, fuente: <http://americas.irc-online.org/am/5652>

³⁰ Alex Sanchez, *The US military's presence in the Greater Caribbean Basin*, Council on Hemispheric Affairs, fuente: http://www.thepanamanews.com/pn/v_15/issue_16/opinion_11.html

³¹ Eliot Brockner, *Anti-drug bases in Panama and the drug war in 2010*, “Latin American Thought”, 30 de diciembre de 2009, fuente: <http://www.latamthought.org/2009/21/30/anti-drug-bases-in-panama-and-the-drug-war-in-2010/>

³² Helga Serrano, *op. cit.*

amazónicas de Caquetá y Putumayo, y Nariño en el sur, en la frontera con Ecuador. Desde 1999, agencias norteamericanas comparten inteligencia en “tiempo real” con las Fuerzas Armadas de Colombia.³³

La reactivación de la IV Flota

La reactivación de la IV Flota ha sido recibida, en el mejor de los casos, con recelo, y alarma, en el peor. El anuncio ha provocado una ola de advertencias de parte de líderes de la región, preocupados de que el ancestral intervencionismo norteamericano en los asuntos internos de América Latina haya recibido una vigorosa inyección con la reaparición de la IV Flota. Ellos se han referido a la IV Flota como “una amenaza en nuestras aguas” y “una expresión de desesperación en Washington [...] incapaz de detener la ola de gobiernos revolucionarios fuera de su esfera de influencia.” Consideran, con razón, que la geopolítica detrás de la reactivación de la IV Flota – y otras expansiones del poder militar norteamericano en la región – tiene mucho que ver con la importancia cada vez mayor del abastecimiento energético y el descubrimiento de enormes depósitos de petróleo en Venezuela, Brasil y Cuba. Especialmente, en el contexto del surgimiento de gobiernos de izquierda en países productores de petróleo, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, que están convirtiendo la tradicional sumisión de sus naciones a los intereses de Washington en una reliquia del pasado. En este sentido, el Pentágono – y el Senado, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y la Casa Blanca – tiene miedo del éxito de iniciativas tales como Petrocaribe en la región, así como la potencial pérdida de suministros de petróleo de Venezuela (y a mediano plazo de Brasil, Bolivia y Cuba) a China, Rusia y otros países. La desesperada necesidad de garantizar el suministro vital de energía de sus cada vez más autónomos vecinos del sur está llevando al Pentágono y a otros en EE.UU. a recurrir a una política de cerco militar, principalmente de Venezuela, pero también de toda la región con el objetivo último de recurrir a medios militares para reestablecer la subordinación de su patio trasero. No es de extrañar que “funcionarios brasileños, entre ellos el presidente Lula da Silva, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, y miembros de la oposición del Senado brasileño, hayan abiertamente vinculado el restablecimiento de la IV Flota a hallazgos de petróleo en Brasil y han utilizado el anuncio para acelerar su independencia energética y la creación de un Consejo de Defensa Sudamericano. También han exigido que Estados Unidos explique la lógica de una nueva flota en una región del mundo que está, en gran medida, en paz y han insistido que no se le permitirá entrar en aguas brasileñas (cuyas fronteras son fuente de alguna controversia) sin autorización”.³⁴

³³ Helga Serrano, *op. cit.*

³⁴ Jeffrey D. Maclay et al, *The Fourth Fleet. A Tool of U.S. Engagement in the Americas*, Center for

El Comando Sur ha dado muy poca información respecto del tamaño exacto de la IV Flota, pero se sabe que tendrá su sede en el Cuartel General del Comando Sur en la Estación Naval de Mayport, en Florida, que será dirigida por el contralmirante Joseph Kernan, actual comandante del Comando Naval Especial de Guerra, y “que la flota estará encabezada por el portaaviones nuclear USS George Washington. El Comando Sur cuenta actualmente con once buques que podrían ser puestos bajo la autoridad de la IV Flota. El [entonces] cabeza del Comando Sur, Almirante James G. Stavridis, es también un alto oficial de la marina.”³⁵ Otra fuente informa que la flota también tendrá un submarino nuclear.³⁶ Por otra parte, la IV Flota es parte integrante del sistema general de seguridad militar y económica norteamericana y que incluye el Plan México, Plan Colombia, ASPAN, el Comando Sur, NORCOM, y el TLCAN.³⁷

Una de las muchas manifestaciones de la alarma general en la región sobre la decisión injustificada de restablecer la IV Flota ocurrió “El 1 de julio de 2008, [cuando], el Parlamento de Mercosur, incluyendo Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, junto a delegados de Venezuela, Bolivia y Chile, expresó su desacuerdo público con la decisión.”³⁸ La reacción de América Latina al establecimiento unilateral de Washington de la IV Flota “ha sido la formación de UNASUR, un pacto de 12 naciones de seguridad mutua que deliberadamente excluye a los EE.UU.”³⁹

Bases norteamericanas en Panamá

La elección del empresario pro-EE.UU., Roberto Martinelli, a la presidencia de Panamá ha reforzado la política norteamericana intervencionista hacia América Latina. Martinelli fue el único líder regional que dio apoyo incondicional tanto al régimen de facto de Micheletti como a las seriamente irregulares elecciones del 29 de noviembre de 2009 en Honduras. Formalmente, la posición de Martinelli

Strategic & International Studies, February 2009, págs. 16–17, fuente: http://csis.org/files/media/isis/pubs/090218_maclay_fourthfleet_web.pdf, source of image of SOAS: <http://soaw.org/presente/images/stories/artists/latinamericapullsoutlarge.jpg>

³⁵ Larry Birns, Aviva Elzufon, *Washington Revives the Fourth Fleet: The Return of U.S. Gun Boat Diplomacy to Latin America*, COHA, 2 de junio de 2008, fuente: <http://www.coha.org/washington-revives-the-fourth-fleet-the-return-of-us-gun-boat-diplomacy-to-latin-america/>

³⁶ John Ross, *Fourth Fleet Steams South. Return of the Gunboat*, “Counterpunch”, 31 de julio de 2008, fuente <http://www.informationclearinghouse.info/article20389.htm>

³⁷ Las siglas se refieren a Alianza para la Seguridad y la Prosperidad (ASPAN) que un periódico bien informado como “La Jornada” considera una “grave amenaza para la soberanía nacional”. José Antonio Almazán González, *ASPAN: riesgo para México*, 22 de marzo de 2007; el Comando del Norte (NORCOM); y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

³⁸ WOLA et al, *Waiting for Change: Trends in U.S. Security Assistance to Latin America and the Caribbean*, *op. cit.*, pág. 8.

³⁹ John Ross, *op. cit.*

en relación al golpe de Estado contra Zelaya, fue peor que la de EE.UU. La postura pro-EE.UU. de Martinelli va mucho más allá que ponerse del lado de Micheletti, y ahora Lobo en Honduras. Su gobierno comenzó negociaciones con EE.UU. encaminadas a restablecer bases militares norteamericanas en Panamá. “El 1 de diciembre de 2009, sin mucho aspaviento, Panamá anunció la creación de la primera de las 11 bases en la Isla Chapera, una isla en el archipiélago de Las Perlas en el Golfo de Panamá. El objetivo principal de las bases será el combate antinarcóticos.”⁴⁰ Se ha identificado otros dos lugares para establecer estaciones navales militares: Bahía Piña y Punta Coca, en la costa del Pacífico.

Todo este proceso ha tenido altos y bajos, pero lo que importa resaltar es la fuerte inclinación de EE.UU. y sus aliados regionales a militarizar la región, de acuerdo con Washington y siguiendo los deseos del Pentágono. Debe, además, tenerse en cuenta que Panamá es miembro de la Iniciativa Mérida, por lo que recibiría cerca de 10 millones de dólares entre 2009 y 2010. La restauración de bases militares norteamericanas en Panamá revierte décadas de esfuerzo nacionalista panameño para adquirir la plena soberanía en el espíritu y la letra del Tratado Torrijos-Carter, especialmente después de que, en 1989, EE.UU., usando las mismas bases, invadió Panamá.⁴¹

La base de Soto Cano y el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras

EE.UU. mantiene una fuerte presencia militar en Honduras en la base militar Soto Cano (Palmerola), situada a unos 50 kilómetros de la capital, Tegucigalpa, que ha estado en operaciones desde 1981. Soto Cano fue utilizada por el coronel Oliver North.

“como base de operaciones de la Contra, paramilitares entrenados, armados y financiados por la CIA, y encargados de hacer la guerra contra todos los movimientos de izquierda en América Central, especialmente el gobierno sandinista en Nicaragua. Desde Soto Cano, la Contra lanzó ataques

⁴⁰ Eliot Brockner, *Panama Inaugurates First of 11 Anti-Narcotics Bases*, “America’s Quarterly”, 10 de diciembre de 2009, fuente: <http://www.americasquarterly.org/taxonomy/term/71>

⁴¹ El 20 de diciembre de 1989, en una acción completamente ilegal, George Bush Sr dio la orden de invadir Panamá a objeto de arrestar a Manuel Antonio Noriega, hombre fuerte del país, acusándolo de tráfico de drogas, lo que llevó al despliegue de 24,000 soldados y más de 300 aviones norteamericanos, en el corto plazo de 4 días y que significó la muerte de 23 soldados norteamericanos, además de 324 Marines heridos, pero que en el lado panameño llevó a la muerte de 5.000 personas, principalmente civiles. Irónicamente, la invasión recibió el nombre oficial de ‘Operación Causa Justa’ y fue dirigida por el Comando Sur. El nuevo presidente de Panamá, Guillermo Endara, fue juramentado en la base naval norteamericana, Rodman, en Panamá. Detalles se pueden consultar en: http://www.wordiq.com/definition/Operation_Just_Cause. Además del excelente documental *The Panama Deception* (1992), dirigido por Barbara Trent, ganador de un Oscar como el mejor documental en 1993. Los líderes latinoamericanos tienen plena justificación para estar alarmados por la militarización norteamericana de la región.

terroristas, guerra psicológica (supervisada por la Oficina para la Diplomacia Pública de Otto Reich), escuadrones de la muerte y misiones secretas especiales que resultaron en el asesinato de decenas de miles de campesinos y civiles, miles de desaparecidos, torturados, heridos y aterrorizados en toda la región. (...) John Negroponte, embajador norteamericano entonces en Honduras, junto con North y Reich, dirigió y supervisó estas operaciones sucias. Más tarde todos ellos se involucrarían en el escándalo Irán-Contra luego de que el Congreso de EE.UU. cortara el financiamiento de los grupos paramilitares y escuadrones de la muerte utilizados por la administración Reagan para neutralizar los movimientos de izquierda en la región, y el equipo Negroponte-North-Reich vendió armas a Irán para seguir financiando sus operaciones encubiertas.⁴²

Debido a la servil subordinación de la oligarquía hondureña y de sus fuerzas armadas EE.UU. ha favorecido tradicionalmente el uso de Honduras para sus operaciones militares contra gobiernos de la región que considera enemigos.⁴³ Por ello, la política del presidente Zelaya de reducir el poder de la oligarquía hondureña por medio de la redistribución del ingreso y, en especial, su decisión de alinear Honduras con los países del ALBA, fueron recibidas con intensa hostilidad en Washington. Por otra parte, el fortalecimiento de la soberanía del país de Zelaya implicaba de manera crucial la reducción y eventual erradicación del dominio militar norteamericano en Honduras. Tal ‘irresponsable aventura’ no sería permitida.

El 31 de mayo de 2008, Zelaya anunció que la base de Palmerola se convertiría en un aeropuerto civil internacional. La construcción del aeropuerto iba a ser financiada por la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA – de los cuales Bolivia, Cuba, Ecuador, Dominica, Honduras, Nicaragua, San Vicente, Antigua y Barbados y Venezuela son miembros). Pero no fue así. Zelaya fue derrocado en un golpe, el 28 de Junio de 2009. El golpe fue realizado por una poderosa coalición de la élite hondureña, que controla todas las instituciones claves del Estado en Honduras (Corte Suprema, Congreso, Fuerzas Armadas, Policía) y que, utilizando su influencia sobre estos organismos, tramó una crisis política para acusar al Presidente Zelaya de haber actuado inconstitucionalmente, lo que llevó a las fuerzas armadas a detener violentamente al Presidente, quien luego fue llevado a Costa Rica en un avión, donde fue ‘descargado’ sin ninguna ceremonia en pijamas en el aeropuerto de San José.

Muchos de los actores claves en la crisis de Honduras, tanto hondureños como norteamericanos, han tenido algún tipo de relación importante con los militares norteamericanos. De hecho, toda América Central parece tener embajadores norteamericanos con fuertes conexiones con Otto Reich, John Negroponte y los militares norteamericanos.

⁴² Eva Golinger, *Washington behind the Honduras coup: Here is the evidence*, “Global Research”, Center for Research on Globalization, 15 de Julio de 2009, fuente: <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14390>

⁴³ Se ha utilizado a Honduras como plataforma de lanzamiento para invasiones militares o agresiones militares repetidas contra Guatemala en 1954, Cuba en 1959, Nicaragua y América Central como un todo en los 1980.

Cuadro. Contactos con los militares norteamericanos

Nombre	Función	Rol	Conexión con los militares norteamericanos
1	2	3	4
General Luis Javier Prince Suazo	Comandante en Jefe la Fuerza Aérea Hondureña	llevó a cabo la orden de arresto contra el presidente Zelaya llevándolo al exilio forzado en Costa Rica	Egresado de la Escuela de las Américas en 1996 – contactos estrechos con el Pentágono y el Comando Sur
General Romeo Vásquez	Jefe del Alto Mando Militar de Honduras	Uno de los principales actores en el golpe militar. A cargo de las acciones represivas contra el movimiento de masas a favor de Zelaya.	Egresado de la Escuela de las Américas – contactos estrechos con el Pentágono y el Comando Sur
Charles Ford	Embajador de EE.UU. en Honduras hasta septiembre de 2008	Afirmó públicamente que una gran parte de las remesas a Honduras se habían originado en el tráfico de drogas. Afirmó que se había sentido „intimidado” durante sus 3 años como embajador en Honduras (tantos como Zelaya fue presidente)	Transferido de Honduras al Comando Sur; encargado de dar “asesoramiento estratégico” al Pentágono sobre América Latina, cargo que ocupa en la actualidad.
Hugo Llorens	Embajador de EE.UU. en Honduras durante el derrocamiento de Zelaya	Trabajó junto con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Otto Reich, durante el golpe de Estado en 2002, contra el presidente Chávez	Nombrado Director de Asuntos Andinos en los EE.UU. Consejo Nacional de Seguridad (de George W. Bush en 2002), asesor principal del Presidente de EE.UU. en Venezuela. Egresado del Colegio Nacional de Guerra en los EE.UU.
Robert Blau	Nombrado embajador de EE.UU. en El Salvador	Subdirector de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado de EE.UU., luego de trabajar durante dos años en la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana, Cuba, como consejero político	Trabajó también en el equipo de Otto Reich en el Departamento de Estado. Egresado del Colegio Nacional de Guerra en EE.UU.

1	2	3	4
Stephen McFarland	Nombrado Embajador de EE.UU. en Guatemala en 2008	Segundo al mando en la Embajada de EE.UU. en Venezuela durante el mandato de William Brownfield. Director de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, afirma ser experto en „transiciones democráticas, derechos humanos y cuestiones de seguridad.”	Antiguo miembro del Equipo de Combate Número 2 de la Infantería de Marina de EE.UU. en Irak. Enviado a la Embajada de EE.UU. en Paraguay para supervisar la construcción de la base militar norteamericana de Estigarribia en ese país. Graduado del Colegio Nacional de Guerra de EE.UU.
Robert Callahan	Embajador de EE.UU. en Nicaragua	Ha trabajado en las embajadas de EE.UU. en La Paz, Bolivia, y San José, Costa Rica.	Distinguido profesor en el Colegio Nacional de Guerra (en el 2004, se le envió a Irak como agregado de prensa en la Embajada de EE.UU. en Bagdad). Estableció la oficina de prensa y propaganda de EE.UU. Dirección de Inteligencia Nacional, el organismo más poderoso de inteligencia de EE.UU

Fuente: Eva Golinger, *Washington and the Honduran coup d'état: Here is the evidence*, disponible en: <http://www.chavezcode.com/2009/07/washington-coup-in-honduras-here-is.html>

Toda la evidencia disponible muestra que EE.UU. tenía conocimiento previo del golpe y que no entregó esta información al presidente constitucional de Honduras. “El Departamento de Estado también confirmó que dos representantes de alto nivel del Departamento de Estado, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, y el Subsecretario de Estado Adjunto, Craig Kelly, estuvieron en Honduras la semana previa al golpe de Estado y que tuvieron reuniones con grupos de civiles y militares que más tarde participaron en el derrocamiento ilegal de un presidente elegido democráticamente.”⁴⁴ Además, el avión que sacó a la fuerza a Zelaya de Honduras y lo llevó a Costa Rica, se detuvo en la base militar norteamericana de Soto Cano para recargar combustible. EE.UU. todavía no ha dado una explicación satisfactoria de por qué permitió que una base militar bajo su control se usara en un golpe de Estado contra el presidente democráticamente elegido de un país amigo (no se tiene bases

⁴⁴ Eva Golinger, *Washington and the Honduran coup d'état: Here is the evidence*, fuente: <http://www.chavezcode.com/2009/07/washington-coup-in-honduras-here-is.html>

militares en países enemigos a menos que se les tenga bajo ocupación militar). Hasta ahora los desmentidos oficiales no son convincentes.⁴⁵

El derrocamiento de Zelaya puso fin a la propuesta soberana de convertir a Soto Cano en un moderno aeropuerto internacional, y muestra cómo EE.UU. reacciona ante cualquier decisión, no importa cuán soberana sea, de cualquiera de sus vecinos del Sur cuando tiene que ver con su presencia militar en la región. El derrocamiento de Zelaya no sólo está en consonancia con el conjunto de objetivos estratégicos del Comando Sur en la región, sino que también es perfectamente coherente con la intensa hostilidad de Washington al ALBA.

Los equívocos de Washington (y de Obama) de condenar públicamente el golpe de Estado, pero de negarse totalmente a utilizar su influencia para castigar a los autores, así como las declaraciones de su inocencia en el derrocamiento de Zelaya, no convencieron a nadie. Especialmente, teniendo en cuenta que la organización que agrupa a la oposición hondureña a Zelaya es la Unión Democrática Civil de Honduras (que agrupa a las principales instituciones de la élite y cuyo único objetivo era derrocar a Zelaya), la mayoría de cuyos componentes se convirtieron en “los beneficiarios de más de US\$50 millones anuales desembolsados por la USAID y la National Endowment for Democracy para la ‘promoción de la democracia’ en Honduras.”⁴⁶

HAITÍ: AYUDA HUMANITARIA O INVASIÓN NORTEAMERICANA

A raíz del terremoto en Haití, el 12 de enero de 2010, utilizando informes exagerados de disturbios y saqueos, EE.UU. envió miles de soldados a esa nación caribeña. En un momento el Comando Sur llegó a tener más de 15.000 marines desplegados en la devastada nación del Caribe. Esto causó preocupación generalizada en los líderes de la región de que el Comando Sur y EE.UU. buscaban establecer una presencia militar fuerte y permanente en este país. Tal despliegue, en línea con los objetivos militares norteamericanos en la región, resulta en una formidable posición estratégica y geopolítica para EE.UU. Un especialista bien informado se ha referido a esto como “Haití: Otra ocupación militar norteamericana”.⁴⁷ Tanto Brasil como Francia presentaron denuncias formales contra Estados Unidos luego que aviones de guerra norteamericanos tuvieron prioridad para aterrizar en el aeropuerto de la capital haitiana, “obligando a muchos vuelos no norteamericanos a desviarse a la República Dominicana”.⁴⁸

⁴⁵ Freddy Cuevas, *U.S. Military Denies Role in Coup Fight*, 16 de agosto de 2009, “ABC News”, fuente: <http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=8338274>

⁴⁶ Eva Golinger, *Washington and the Honduran...*, *op. cit.*

⁴⁷ Mark Weisbrot, *Haiti: Another U.S. Military Occupation*, “Monthly Review”, 21 de enero de 2010, fuente: <http://mrzine.monthlyreview.org/2010/weisbrot210110.html>

⁴⁸ “The Guardian”, 17 de enero de 2010, fuente: <http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/17/us-accused-aid-effort-haiti>

Una organización oficial de ayuda humanitaria de la ONU, el Programa Mundial de Alimentos, declaró: “Hay 200 vuelos que entran y salen todos los días, lo que es una cantidad increíble para un país como Haití [...] Pero la mayoría de los vuelos son para los militares norteamericanos. Sus prioridades son asegurarse el país. Las nuestras son distribuir alimento. Tenemos que lograr esas prioridades en sincronía.”⁴⁹

Aviones, camiones y todo tipo de envíos (incluyendo un hospital de campaña completo) de organizaciones de socorro tan diversas como Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, y vuelos humanitarios de Francia, Italia, Brasil, Argentina, Perú y México se vieron obstaculizados por serles negado el permiso o porque sus envíos fueron desviados por los militares norteamericanos. A la misión de ayuda de emergencia de CARICOM a Haití simplemente se le negó permiso para aterrizar.⁵⁰ Los Marines norteamericanos pudieron hacer esto porque tenían el control militar sobre los principales puertos y aeropuertos. Incluso tuvieron el palacio presidencial de Port-au-Príncipe rodeado.

Después que dos vuelos de socorro fueron rechazados el embajador francés en Haití, Didier Le Bret, dijo que el aeropuerto de Puerto Príncipe se ha convertido “no en un aeropuerto para la comunidad internacional. Es un anexo de Washington.”⁵¹ Alain Joyandet, ministro francés de cooperación, declaró en la radio francesa que “se trata de ayudar a Haití, no de ocupar Haití”.⁵² Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba también criticaron el énfasis excesivo de Washington en el despliegue militar en vez de la ayuda humanitaria y la aparente falta de deseo de trabajar en colaboración con otros para ayudar a Haití. En una conferencia de prensa, a fines de enero, el presidente de Bolivia, Evo Morales dijo: “No es justo que Estados Unidos use este desastre natural para invadir y ocupar militarmente a Haití”.⁵³ “El Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, al referirse a los 16.000 soldados enviados por EE.UU. pocos días después de la tragedia, dijo que la devastada nación del Caribe no se merece una invasión”.⁵⁴

⁴⁹ “The Guardian”, 17 de enero de 2010, fuente: <http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/17/us-accused-aid-effort-haiti>

⁵⁰ International Action Center, *Food Not Troops – End the U.S. Military Occupation of Haiti*, fuente: <http://www.iacenter.org/haiti/haiti-011910/>

⁵¹ “The Guardian”, 17 de enero de 2010, fuente: <http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/17/us-accused-aid-effort-haiti>

⁵² Al Jazeera, 27 de enero de 2010, fuente: <http://english.aljazeera.net/news/americas/2010/01/201012735146643582.html>

⁵³ “Global Research”, *Latin American Leaders: International relief operation in Haiti is a cover up for a military takeover*, 22 de enero de 2010, fuente: <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17173>

⁵⁴ RNV, *UNASUR approves fund of \$ 100 million for aid to Haiti*, 10 de febrero de 2010, fuente: <http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&cf=31&ct=119629>

Incluso en EE.UU. ha habido voces críticas sobre el manejo de la Casa Blanca de la crisis de Haití. El Senador Ron Paul (Texas – R), por ejemplo, dijo:

“Estoy preocupado por la posibilidad de una ocupación militar norteamericana de Haití sin término y esta legislación no hace nada por aliviar mis preocupaciones. Por el contrario, cuando esta resolución habla de la necesidad de un plan norteamericano de largo plazo para Haití, veo un retorno a los intentos fallidos de los gobiernos de Clinton y Bush para convertir Haití en un protectorado estadounidense. Ya algunos sostienen que este tipo de misión humanitaria es una tarea perfecta para los militares norteamericanos. No estoy de acuerdo.”⁵⁵

Sea cual sea la motivación del senador republicano de Texas, por lo menos llama a las cosas por su verdadero nombre.

A fines de enero, el Subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Arturo Valenzuela, rechazó las acusaciones de que EE.UU. estaba ocupando Haití militarmente: “Todo el mundo [...] respeta la soberanía de Haití, Estados Unidos respeta la soberanía de Haití.”⁵⁶ Sin embargo, teniendo en cuenta la actitud norteamericana al golpe de Estado contra Zelaya en Honduras y el papel que la base militar norteamericana en ese país jugó, el acuerdo militar con Colombia, las provocaciones militares contra Venezuela, y el establecimiento de más bases militares norteamericanas en Panamá, tales declaraciones suenan huecas.

En contraste directo con la negación de Valenzuela, la influyente y conservadora Fundación Heritage tiene una visión completamente diferente sobre la operación militar norteamericana en Haití, que vale la pena citar *in extenso*:

Hasta la fecha la respuesta de Estados Unidos al devastador terremoto que azotó Haití el 12 de enero ha sido demasiado silenciosa, creando un inesperado vacío de liderazgo en una región crítica. Haití es la nación más pobre de las Américas. El gobierno del Presidente René Préval es débil y, literalmente, ahora está en ruinas. Cuba y Venezuela, que ya han intentado minimizar la influencia de EE.UU. en la región, es probable que aprovechen esta oportunidad para mejorar su visibilidad e influencia en un país que ya está luchando contra las drogas y la corrupción. (...) Es evidente que es en el interés de EE.UU. evitar que esta tragedia empeore y garantizar que Haití salga de esta crisis como una democracia más fuerte. El presidente Obama debe iniciar una respuesta rápida que no sólo sea audaz, sino decisiva, la movilización de las capacidades militares, gubernamentales, y civiles de EE.UU., para un rescate a corto plazo, y esfuerzos de ayuda humanitaria y de recuperación a largo plazo, así como un programa de reforma en Haití.⁵⁷

La declaración de la Fundación incluye el consejo a la administración Obama a tomar medidas que aumenten el dominio económico estadounidense

⁵⁵ Ron Paul, *No Military Occupation of Haiti*, “Campaign for Liberty”, 22 de enero de 2010, fuente: <http://www.campaignforliberty.com/article.php?view=547>

⁵⁶ “Global Research”, 22 de enero de 2010, fuente: <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17173>

⁵⁷ Jams M. Roberts and Ray Walsler, *American Leadership Necessary to Assist Haiti After Devastating Earthquake*, The Heritage Foundation, 13 de enero de 2010, fuente: <http://www.heritage.org/Research/LatinAmerica/wm2754.cfm>

en la economía de Haití mediante una combinación de operación militar con un esfuerzo de diplomacia pública vigorosa para contrarrestar la influencia de Venezuela y Cuba y su impacto en las actividades de ayuda humanitaria.

Las tareas de ayuda humanitaria en Haití no deben ser subestimadas, sin embargo. Siendo el país más pobre del hemisferio, con carencia dramática de infraestructura y recursos de todo tipo, Haití tiene que enfrentarse a la realidad del desplome substancial de los mecanismos normales de la vida cotidiana en un contexto de cerca de 300.000 víctimas fatales.

El enfoque de América Latina ha sido el opuesto del de EE.UU. El 9 de febrero de 2010, UNASUR aprobó un fondo de ayuda para Haití de US \$ 100 millones, se invitó al presidente de Haití, René Préval, a la reunión y se alentó a todos sus miembros a borrar la deuda de Haití. Además UNASUR en bloque acordó un crédito de unos US\$ 200 millones para el Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a Haití más aun, y en un acuerdo de 12 puntos tomó decisiones de ayudar a Haití en áreas como salud, vivienda, infraestructura, agricultura y alimentos, energía, migración y educación. El Presidente Chávez, por su parte, canceló sin condiciones de ningún tipo la totalidad de la deuda haitiana a Venezuela.

En contraste, el Comando Sur está a cargo total de la operación de Haití y detenta la posición dominante, sin embargo, EE.UU. tiene agencias civiles para situaciones como la de Haití, como la USAID y la Agencia Federal de Emergencias, pero ha habido una clara preferencia política por un enfoque militar. El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., almirante Mike Mullen, ha sido el encargado de hacer los anuncios públicos claves a los medios de comunicación de las decisiones del Pentágono sobre el despliegue de personal y equipos militares en Haití, lo que confirma tanto la importancia que el Pentágono atribuye a la operación como qué ministerio norteamericano está realmente a cargo.

El malestar entre los gobiernos de América Latina de ver a los militares norteamericanos adquirir de hecho otra posición militar estratégica en la región, esta vez en Haití, es perfectamente comprensible. El despliegue norteamericano en Haití cierra un anillo formado por las bases e instalaciones militares en las Bahamas, Guantánamo, Puerto Rico, Saint Croix y Saint Thomas, Antigua, la IV Flota, El Salvador, Colombia, Panamá, Honduras. Cuba, Venezuela y Nicaragua se encuentran completamente rodeadas de bases militares norteamericanas.

LA DINÁMICA DE LA MILITARIZACIÓN NORTEAMERICANA EN COLOMBIA

El uso de estas bases marca una expansión de la estrategia militar norteamericana en Colombia, que ha cada vez más regionalizado el conflicto armado interno de Colombia en la medida que las operaciones militares, las poblaciones

de refugiados, los combatientes armados, e incluso los herbicidas que se usan para erradicar los cultivos de coca se han derramado mas allá de las fronteras de Colombia, no sólo hacia Venezuela y Ecuador, sino también Panamá y Brasil.⁵⁸ Debido a la dinámica diabólica del conflicto interno en Colombia, los países vecinos se ven arrastrados por éste por medio del tráfico de drogas, la actividad paramilitar, el desplazamiento de millones de personas, refugiados, migrantes económicos colombianos y la guerra interna en Colombia misma. Desafortunadamente, ni Colombia ni EE.UU. pueden garantizar que la profundización de la estrategia militar seguida hasta ahora no aumente los efectos negativos sobre otros países.

Por otra parte, las características del mercado de drogas ilícitas requieren un enfoque integral a este problema. Sectores muy influyentes de los medios de comunicación, tales como “The Economist”⁵⁹, reconociendo las enormes complejidades asociadas a este problema, han estado abogando por la legalización del comercio de cocaína.⁶⁰ La estrategia actual centrada en lo militar no puede generar, y en más de una década desde la implementación del Plan Colombia no ha generado, resultados sostenibles, sino que se ha convertido en una fuente de inestabilidad en la región. De hecho, la mayoría de los analistas – salvo la posición oficial, tanto en Bogotá como Washington – creen que el Plan Colombia es un fracaso. La revista norteamericana “Newsweek”, de ninguna manera un crítico radical de la política norteamericana en Colombia, en enero de 2009, publicó una crítica mordaz:

“Desde el año 2000, EE.UU. ha enviado más de US\$6 mil millones a Bogotá para ayudar a Uribe y a su predecesor a estabilizar la región andina, detener el flujo de drogas a las ciudades norteamericanas y reducir la producción de drogas. En lo que se conoce como Plan Colombia, Washington ha enviado pilotos y helicópteros a Colombia, comandos entrenados y armas equipadas para luchar contra traficantes y terroristas. Por su parte, Uribe y su antecesor elevaron el presupuesto militar de 4 a 6% del PIB nacional. Pero en lugar de cortar la producción de drogas a la mitad para el año 2006, como el Plan Colombia pretendía, la superficie de tierra dedicada al cultivo de coca ha aumentado en un 15% desde el año 2000 y ahora se produce 4% más de cocaína que hace ocho años. Un informe de octubre (2009) de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental norteamericana, una agencia de supervisión, dice que los objetivos del Plan Colombia ‘no han sido logrados plenamente’.”⁶¹

⁵⁸ Laura Carlsen, *The Andean Crisis*, “Foreign Policy in Focus”, 19 de marzo de 2009, fuente: http://www.fpif.org/articles/the_andean_crisis. Lula “requested guarantees from Mr. Uribe that the military cooperation with the United States would not spill over Colombia’s borders, Celso Amorim, Brazil’s foreign minister...”; Alexei Barrionuevo, *Colombia President, on South America Tour, Defends U.S. Military Role*, 7 de agosto de 2009, “The New York Times”, fuente: <http://www.nytimes.com/2009/08/08/world/americas/08colombia.html>

⁵⁹ *The case for legalisation*, “The Economist”, 26 de julio de 2001.

⁶⁰ En un artículo de marzo de 2009, “The Economist” nuevamente reiteró su apoyo por la legalización: “Legalization would not only drive away the gangsters; it would transform drugs from a law-and-order problem into a public-health problem, which is how they ought to be treated.” Fuente: <http://prorev.com/2009/03/economists-case-for-drug-legalization.html>

⁶¹ Adam B. Kushner, *The Truth About Plan Colombia. The U.S.-backed war on drugs is failing, as coca*

A lo que hay que añadir que, según el Observatorio de Desplazamiento Interno, el conflicto interno de Colombia y la violencia asociada a la ‘industria’ de la cocaína había provocado el desplazamiento de 4.628.882 personas en 2008 (aunque la cifra oficial del gobierno es 2.977.209, que se cree es una subestimación).⁶²

Lo que América Latina necesita es paz en Colombia, no el desbordamiento de la guerra colombiana a toda la región, ni mucho menos su regionalización, que es la estrategia favorecida por el Pentágono y Washington. La mezcla de una estrategia de combate al narcotráfico con el combate contra la insurgencia sólo ha exacerbado el conflicto colombiano. Como lo han demostrado conflictos internos anteriores, la solución para la última guerra civil que queda en la región es política, no militar.

Mucho más que Ecuador, Venezuela ha sido el país más afectado por el conflicto interno de Colombia. Venezuela ha recibido a millones de desplazados y se estima que hasta 4.5 millones de colombianos residen en Venezuela (alrededor de 180.000 en Ecuador⁶³); Venezuela ha, además, sufrido violencia constante a lo largo de su enorme frontera común con Colombia. Por otra parte, Venezuela fue continuamente atacada por el gobierno norteamericano y por el gobierno de Uribe durante toda la década con falsas acusaciones de apoyo a grupos terroristas y de participación en el tráfico de drogas.⁶⁴

Además, el gobierno de Uribe se mostró dispuesto a llevar la guerra interna de Colombia a un país vecino, cuando en marzo de 2008 invadió el territorio de Ecuador violando la soberanía de esta nación, para atacar un campamento de las FARC en el cual 24 guerrilleros perdieron la vida, incluyendo el número dos de las FARC, Raúl Reyes. El ataque se justificó bajo los principios de la doctrina de la “guerra preventiva”.

Una comisión de investigación ecuatoriana llegó a la conclusión de que la entonces base militar norteamericana en Manta jugó un papel central en la coordinación del ataque y fue el lugar desde donde despegó el avión que se utilizó en el ataque.⁶⁵ Las negativas de voceros de Washington han sido totalmente

traffickers stay one step ahead of Uribe, “Newsweek”, 3 de enero de 2009, fuente: <http://www.newsweek.com/id/177681>

⁶² Internal Displacement Monitoring Centre, *Colombia: New displacement continues, response still ineffective*, 3 de julio de 2009, fuente: [http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29%5BCA28006BFAA8ADC12575E8005CBF23/\\$file/Colombia+-+July+2009.pdf](http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29%5BCA28006BFAA8ADC12575E8005CBF23/$file/Colombia+-+July+2009.pdf)

⁶³ Según la UN Refugee Agency (UNHCR) en 2009 había 135,000 Colombianos desplazados residentes en Ecuador, “El Tiempo”, 27 de marzo de 2009, fuente: <http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/12657-acnur-da-documentos-de-refugiados-a-50-000-colombianos-en-ecuador/>

⁶⁴ Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United States, *Context Paper: The Regional Implications of the New U.S. – Colombian Military Agreement*, fuente: <http://www.em-bavenez-us.org/factsheet/091109CP-US%20Bases%20in%20Colombia.pdf>

⁶⁵ Véase detalles en Comisión de Transparencia y Verdad “Caso Angostura”, fuente: <http://www.scribd.com/doc/24329223/informe-angostura>

no convincentes, ya que no proporcionan ninguna prueba para justificar tal negativa. Peor aún, del ataque a Ecuador, el gobierno colombiano ‘descubrió’ algunos ordenadores portátiles y discos de computadora que habrían ‘revelado’ la participación de Venezuela y Ecuador en el conflicto interno colombiano, con campos de entrenamiento, entrenamiento militar para la guerrilla, suministro de armas, suministro de refugio a dirigentes de las FARC, y permitir campamentos guerrilleros de las FARC en sus territorios. Estas ‘revelaciones’ condujeron a una intensa campaña mediática internacional de satanización, principalmente, de Venezuela, pero también de Ecuador, destinada a presentar a estos dos países como patrocinadores de terrorismo, caracterización clave en la justificación de Washington para comenzar hostilidades (de sanciones políticas y económicas a la acción militar) contra estos Estados como parte de su ‘guerra contra el terrorismo’. Muy controvertidamente, INTERPOL confirmó como verdadera la evidencia encontrada en las computadoras portátiles, veredicto basado fundamentalmente en los correos electrónicos que contenían.⁶⁶ Sin embargo, el rechazo a tales acusaciones por parte de Venezuela y Ecuador sería dramáticamente reivindicado cuando Ronald Coy, jefe de la policía judicial colombiana, en coordinación con la Dirección de inteligencia de la policía, informó que las computadoras portátiles no contenían correo electrónico de ningún tipo.⁶⁷ Sin embargo, la no existencia de emails en los laptops ‘mágicos’ no fue obstáculo para que, por ejemplo, Rory Carroll, corresponsal de América Latina del periódico británico “The Guardian”, informara a sus lectores el 16 de Mayo de 2008 que “en un email filtrado de fecha enero de 2007, el líder de las FARC, Jorge Briceño, también conocido como “el Mono”, informó al secretariado ejecutivo que estaba pensando pedirle a Chávez un préstamo por US\$250 millones, “pagadero cuando nos tomemos el poder”. Carroll también les informo a sus lectores que “un rebelde identificado como “Tino”, aparentemente a cargo de las Unidades de Defensa Popular de Venezuela, un grupo de milicias civiles, solicitaba ayuda de las FARC para el aprendizaje de la lucha de guerrillas”.⁶⁸ Muchos otros periodistas, que repitieron las falsas acusaciones contra y el involucramiento de Venezuela y Ecuador con la guerrilla colombiana, el narcotráfico y otras actividades ilícitas y criminales, quedaron atónitos con este giro en la epopeya de las computadoras portátiles.

Por desgracia, el deseo de clasificar a Venezuela y Ecuador como Estados patrocinadores de terrorismo no parece limitarse a secciones del Estado colom-

⁶⁶ Véase VSC (VIC), *A Briefing on the False Claims Against Venezuela*, fuente: http://www.vicuk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=30

⁶⁷ Noticias Uno, *No había correos electrónicos en el PC de Raúl Reyes*, 3 de diciembre de 2008, fuente: <http://www.youtube.com/watch?v=JoCFP8qMDVk>

⁶⁸ Rory Carroll, *Laptop emails link Venezuela to Colombian guerrillas*, “The Guardian”, 16 de mayo de 2008, fuente: <http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/16/venezuela.colombia1>

biano solamente. Una Comisión senatorial norteamericana⁶⁹ encabezada por el senador Richard G. Lugar, emitió un informe en el que se caracteriza Venezuela como un narco-Estado, epíteto que se ajusta bastante bien con la justificación de Washington para la militarización de las operaciones antinarco-cóticos en la región. Tal informe no resiste un análisis serio, su evidencia es, en el mejor de los casos, dudosa y contradice de cara la realidad, ya que Venezuela ha aumentado de forma masiva las incautaciones de cocaína y otras drogas y ha intensificado y multiplicado la cooperación internacional contra el tráfico de drogas (Gran Bretaña ha oficialmente felicitado a Venezuela por esto).⁷⁰ Además, el informe del Senado norteamericano contradice de lleno las tendencias de tráfico de drogas informado por UNODC, organismo especializado de la ONU, encargado de supervisar el tráfico de drogas en el mundo. Por otra parte, Venezuela ha capturado en su territorio y extraditado a 10 de los capos de la droga más buscados de la región. Bajo los términos de acuerdos con 37 países en la lucha contra el tráfico de drogas, el director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, Néstor Reverol, informó que en diez años de gobierno de Chávez:

“Más de 464 toneladas de drogas incautadas en los últimos 10 años, 3.722 personas acusadas de delitos relacionados con el tráfico de drogas en lo que va del año (2009), 181 propiedades confiscadas a traficantes y puestos a disposición del Estado venezolano, la no existencia de cultivos relacionados con las drogas en la frontera con Colombia, un nuevo sistema de radar en pleno funcionamiento, nuestro plan de lucha contra las drogas, elogiado por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), mucha inversión, mucha prevención. Lo que hemos logrado no es (...) insignificante...”⁷¹

La lucha de Venezuela contra el tráfico de drogas es, sin embargo, una lucha cuesta arriba. Los traficantes de drogas tienden a estar un paso delante de todo el mundo (Colombia, EE.UU. y Venezuela) y Venezuela sufre el infortunio de estar situada geográficamente entre el mayor productor de cocaína del mundo (Colombia) y el mayor consumidor de cocaína en el mundo (Estados Unidos).

PROVOCACIONES MILITARES CONTRA VENEZUELA

En el último período el Comando Sur parece haberse embarcado en una serie de provocaciones militares contra Venezuela por medio de aviones de combate norteamericanos que han violado su espacio aéreo. Las autoridades

⁶⁹ United States Government Accountability Office. Report to the Ranking Member, Committee on Foreign Relations, *U.S. Senate: Drug Control: U.S. Counternarcotics Cooperation with Venezuela Has Declined*, fuente: <http://www.gao.gov/new.items/d09806.pdf#20>

⁷⁰ Véase: Chris Bryant, 8 de octubre de 2009, fuente: <http://www.venezlon.co.uk/news/231.asp>

⁷¹ Andres Gaudin, *U.S. Alleges Venezuela Facilitates Drug Trafficking*, “The Free Library”, 14 de agosto de 2009, fuente: <http://www.thefreelibrary.com/U.S.+ALLEGES+VENEZUELA+FACILITATES+DRUG+TRAFFICKING.-a0205754308>

venezolanas han presentado pruebas y detalles de las violaciones. Pero, al igual que con otros desmentidos sobre actividades militares norteamericanas ilegales en la región, los desmentidos oficiales norteamericanos sobre estas violaciones del espacio aéreo venezolano no son convincentes.⁷²

- El 17 de mayo de 2009, por ejemplo, un avión de guerra norteamericano que despegó de Curazao entró en el espacio aéreo venezolano. Las autoridades venezolanas denunciaron la violación, pero no dieron a conocer la transcripción de los detalles de la violación. El avión de combate norteamericano en cuestión sobrevoló La Orchila, una isla de la costa venezolana utilizada principalmente por los militares venezolanos. El 31 de diciembre de 2009, sin embargo, el gobierno de Venezuela dio a conocer las pruebas que demostraban fehacientemente la violación.

- El 20 de diciembre de 2009, soldados venezolanos denunciaron que el espacio aéreo del país había sido invadido de nuevo, esta vez por un avión no tripulado⁷³, en la frontera entre Colombia y Venezuela del estado Zulia. Probablemente el avión no tripulado estaba equipado con sistema de espionaje AWACS, casi con toda seguridad de origen norteamericano.

- El 8 de enero de 2010, dos aviones venezolanos GF-16 interceptaron un avión de guerra norteamericano (P3) que había violado el espacio aéreo del país dos veces⁷⁴ (primero por 15 minutos, y luego durante 19 minutos) en la región del Caribe de Puerto Cabello. El avión había despegado de Curazao adonde regresó después de haber sido interceptado.

Venezuela ha también descubierto actividades colombianas poco convencionales en su territorio. En octubre de 2009, tres agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, la CIA colombiana) fueron detenidos mientras realizaban actividades de espionaje⁷⁵ en territorio venezolano, se les encontró en posesión de documentos secretos del propio DAS, que revelaron operaciones de desestabilización activa y espionaje contra Cuba, Ecuador y Venezuela (operaciones Fénix, Salomón y Falcón, respectivamente⁷⁶). El gobierno colombiano no negó la acusación pero se quejó de que Venezuela hubiera incautado los documentos secretos colombianos.⁷⁷ Venezuela temió que las actividades de espionaje, militares y paramilitares provenientes de Colombia hubieran podido intensificar-

⁷² "ABC News", *U.S. Denies U.S. Plane Flew Over Venezuelan Airspace*, 8 de enero de 2010, fuente: <http://abcnews.go.com/Politics/wireStory?id=9518244>

⁷³ Fuente: <http://www.aporrea.org/actualidad/n147475.html>

⁷⁴ Fuente: <http://www.aporrea.org/tiburon/n148455.html>

⁷⁵ Fuente: <http://www.aporrea.org/imprime/n144557.html>

⁷⁶ Eva Golinger, *Official US Air Force Document Reveals the True Intentions Behind the US-Colombia Military Agreement*, "Global Research", 6 de noviembre de 2009, fuente: <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15951>

⁷⁷ Véase comunicado oficial de DAS, fuente: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo169373-grave-venezuela-tenga-su-poder-documentos-del-das>

se con la firma del ACD entre Estados Unidos y Colombia y las bases militares en territorio colombiano. Además, en octubre de 2009, 10 cuerpos sin vida fueron encontrados en el estado Táchira, región fronteriza con Colombia, sobre los que investigaciones demostraron pertenecían a paramilitares colombianos que se habían infiltrado en territorio venezolano. El gobierno venezolano ha denunciado reiteradamente la actividad paramilitar colombiana en Venezuela como parte de un plan desestabilizador y que busca derrocar al gobierno de Chávez.

En septiembre de 2009, Rafael García, ex director de informática del DAS, en entrevista por televisión⁷⁸ hizo revelaciones sorprendentes acerca de los vínculos entre el gobierno de Uribe, narcotraficantes, paramilitares de las AUC y miembros de la oposición venezolana en planes para asesinar al presidente Hugo Chávez. Aunque voceros del gobierno de Uribe trataron de desacreditar a García, el hecho es que fue el testimonio de García lo que llevó a la detención de Jorge Noguera, ex jefe de inteligencia de Colombia (DAS), que como lo informó la BBC: “ha sido arrestado y acusado de asesinato y de colaborar con las milicias de extrema derecha.”⁷⁹

El turbio mundo de la *parapolítica* colombiana se puede apreciar en un artículo del New York Times, “El escándalo sobre espionaje se intensifica en Colombia”.⁸⁰ En la misma vena un artículo de Associated Press (*Rescatando cadáveres en el recodo del río*) registra que “la Oficina del Fiscal General de Colombia ha compilado una lista de 26.564 colombianos asesinados desde mediados de la década de 1980 por 714 asesinos confesos de los grupos armados ilegales”, señalando que “Los cuerpos son en su mayoría víctimas de las milicias de extrema derecha de Colombia.” Sin embargo, en el mismo artículo se cita a Ian C. Kelly, portavoz del Departamento de Estado norteamericano, quien señala que encuentra el record de Colombia sobre los derechos humanos bastante satisfactorio.⁸¹

Lo anterior muestra el tipo de problema que la situación y el conflicto internos de Colombia representan para sus vecinos, particularmente, Venezuela. Con el acuerdo militar colombo-norteamericano, el venezolano y otros gobiernos en los países vecinos están perfectamente justificados en ver sólo un aumento en las amenazas y los problemas.

⁷⁸ Entrevista con former DAS Informatics Director Rafael García, 7 de septiembre de 2009, fuente: <http://www.youtube.com/watch?v=tLkZeZCQSy8>

⁷⁹ BBC, *Colombia ex-spy chief charged*, 23 de febrero de 2007, fuente: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/6388347.stm>

⁸⁰ Simon Romero, *A Scandal Over Spying Intensifies in Colombia*, “The New York Times”, 16 de septiembre de 2009, fuente: http://www.nytimes.com/2009/09/17/world/americas/17colombia.html?_r=1

⁸¹ Frank Bajak, *Salvaging Corpses at the Bend in the River*, “ABC News”, 10 de enero de 2010, fuente: <http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=9522822>

LA LÍNEA ESTRATÉGICA DEL COMANDO SUR SOBRE
“POPULISTAS RADICALES, NARCOTRAFICANTES Y TERRORISTAS”

Como se estableció anteriormente, en abril de 2008, la Marina de EE.UU. tomó la sorprendente decisión⁸² de resucitar la IV Flota, que había sido dado de baja en 1950, para operar en el Atlántico a lo largo del Caribe, Centro y Sur América. La IV Flota tiene su sede en la Estación Naval de Mayport, en Jacksonville, Florida, y está bajo el mando del Comando Sur en Miami.

Las complejidades del acuerdo militar colombo-norteamericano revelan que es el Pentágono el que en última instancia ha estado a cargo, dictando la estrategia de Washington hacia América Latina. Se trata de respuestas políticas concretas a lo que ve como amenaza al ‘interés nacional’ que pueda surgir en cualquier país de la región. Por lo demás, el Departamento de Estado parece ser muy sensible al estímulo político del Pentágono contra cualquier nación latinoamericana. Esto se puede confirmar con una mirada a la política norteamericana hacia la región desde el Plan Colombia de Bill Clinton hasta el presente, lo que aplica con particular intensidad a la política exterior norteamericana hacia Cuba y Venezuela.

Dentro del Pentágono, el Comando Sur tiene la responsabilidad específica de los asuntos militares en el hemisferio. Durante muchos años el Comando Sur ha definido como su principal preocupación la amenaza que se supone proviene de una alianza entre marxistas narcoguerrilleros, terroristas islámicos y populistas radicales. Con el colapso del bloque soviético, la política exterior norteamericana pasó por una especie de ‘crisis de identidad’ y la retórica tradicional de la Guerra Fría dio paso a la lucha contra el narcotráfico implicando esto un aumento de la ayuda militar y la presencia militar en la región que se basa en la necesidad de apoyar programas de contrainsurgencia contra la narcoguerrilla. En el año 2002 – un año después de la proclamación de Bush de la guerra contra el terrorismo y el descubrimiento del ‘Eje del Mal’, año del golpe de Estado contra el presidente Chávez – el Congreso norteamericano aprobó una ‘misión de expansión’ para las operaciones del Comando Sur que incluyó la lucha contra el terrorismo. En el año 2004, el General James Hill, entonces comandante del Comando Sur, identificó el “populismo radical” como una amenaza “emergente”, al que acusó de explotar la profunda y generalizada frustración en la región a fin de “socavar la democracia” e “inflamar sentimientos antinorteamericanos.” El “populismo radical” es, de esta manera, definido como una amenaza a la seguridad de EE.UU. El punto de vista que ha informado la política norteamericana en la región hacia los gobiernos que más detesta lo ha resumido el propio General Hill: “La sociedad venezola-

⁸² SOUTHCOM, *Building Partnerships and Promoting Maritime Security*, fuente: <http://www.southcom.mil/appssc/factFiles.php?id=55>

na está profundamente polarizada” y “lo seguirá estando mientras el Gobierno de Venezuela continúe por un camino autoritario.” En cuanto a Bolivia se refiere, Hill informó al Congreso norteamericano que “si los radicales siguen apropiándose del movimiento indígena, podríamos encontrarnos frente a un narco-Estado que apoya el cultivo de coca sin control”.⁸³ A partir de esta premisa la lógica de la intervención militar en contra de estas naciones se hace irresistible.

El General Hill fue reemplazado por el General Bantz J. Craddock, que adhiere exactamente a la misma política de su predecesor. El 21 de julio de 2004, él le dijo al Comité de Servicios Armados del Senado, que su máxima prioridad será la de “continuar la guerra contra el terrorismo en la zona de responsabilidad del Comando Sur”. Dijo también que otra de sus prioridades como Comandante del Comando Sur era “mejorar la cooperación en seguridad regional para combatir amenazas transnacionales,” y “coordinar estrechamente la asistencia a los esfuerzos de países amigos para hacer frente a las amenazas que enfrentan en el mantenimiento de democracias efectivas.” Incluso argumentó que los términos “insurgentes” y “guerrilleros” eran obsoletos por lo que creía que el término “narcoterroristas es más apropiado” dado “el increíble apoyo financiero que reciben del tráfico ilícito de drogas”.⁸⁴ Esto ha incluido acusaciones sin fundamento como que “Venezuela ayudó en un complot de ETA y las FARC contra Uribe”.⁸⁵ Lo peor en justificación calumniosa de la política de militarización ocurrió el 30 de abril de 2010, cuando en un informe de 12 páginas del Pentágono se denunció la presencia de Guardias Revolucionarios de Irán “en América Latina, especialmente en Venezuela”.⁸⁶ Tal propaganda para justificar la acción militar, coincide con las opiniones de los colombianos de línea dura, así, por ejemplo, durante la campaña electoral para la primera ronda de las elecciones presidenciales, Juan Manuel Santos, “En un debate en directo entre los candidatos presidenciales, (...) dijo que muchos de ellos se sienten ‘orgullosos’ del ataque en el 2008 de Colombia contra las FARC en territorio ecuatoriano, y agregó que Colombia debe “seguir luchando contra los terroristas, dondequiera que se encuentren”.⁸⁷

En documentos oficiales, el Comando Sur ha señalado también que está interesado en la mejora de la “soberanía efectiva” en “espacios sin gobierno” de América Latina como la “Triple Frontera” entre Paraguay, Argentina y Brasil,

⁸³ Tom Barry, *U.S. Southern Command Confronts Traditional and Emerging Threats*, Americas Program, 24 de julio de 2004, fuente: <http://americas.irc-online.org/am/866>

⁸⁴ Tom Barry, *U.S. Southern Command Confronts Traditional and Emerging Threats*, Americas Program, 24 de julio de 2004, fuente: <http://americas.irc-online.org/am/866>

⁸⁵ Fuente: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/8543349.stm>

⁸⁶ Pentagon Report, fuente: <http://justf.org/blog/2010/04/30/general-frasers-update-southcom>

⁸⁷ Colombia Reports, fuente: <http://colombiareports.com/colombia-news/2010-elections/9075-profile-juan-manuel-santos.html>

donde – se alega – los gobiernos nacionales tienen poco poder, el contrabando es desenfrenado y – como expertos militares norteamericanos afirman, sin proveer evidencia de ningún tipo – la recaudación de fondos para grupos terroristas islámicos como Hamás y Hezbolá está ocurriendo. El ex jefe del Comando Sur, James Hill, afirma que “grupos de organizaciones terroristas del Medio Oriente llevan a cabo actividades de apoyo en el área de responsabilidad del Comando Sur”.⁸⁸ Como es ya habitual, el Comando Sur todavía no ha presentado evidencia de ningún tipo para justificar tan serias acusaciones, sin embargo, el efecto persuasivo que propaganda tan inflamatoria tiene en comités del Congreso norteamericano ya fuertemente imbuidos de un sentimiento anti-populista, no debe ser subestimado. Luego del ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, la reacción pública a propuestas para financiar programas militares contra terroristas islámicos – reales o no – que operan en el ‘patio trasero’ norteamericano, sobre todo, cuando es históricamente publicitado por los medios de comunicación norteamericanos, tampoco se puede subestimar.

Así, aunque el establecimiento de numerosas bases militares y la reactivación de la IV Flota no sorprenda, es difícil no sacar la conclusión de que EE.UU. se está preparando para la guerra. Además, la evidencia indica que EE.UU. parece haber estado preparándose para actividad militar seria en la región desde hace algún tiempo.

Sin embargo, dado que en 2010–2011 guerrillas sólo existen en Colombia y de acuerdo con el gobierno colombiano – que afirma haberles infligido los peores golpes de toda su existencia – su poder, influencia y capacidad militar se han visto seriamente debilitados. Luego de la liberación de los rehenes en poder de la guerrilla, Ingrid Betancourt junto con otros 15 rehenes, en julio de 2008, el “Washington Post” sugirió que la guerrilla había entrado en una fase de declive definitivo. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la misión de rescate había sido posible gracias a que la inteligencia colombiana se había infiltrado en los niveles más altos de la organización guerrillera, incluyendo su dirección máxima de siete. Oficiales del ejército colombiano dijeron también a la prensa que “individuos que abandonaron el grupo rebelde habían traicionado a sus comandantes por dinero, algunos de ellos recibiendo en pago cientos de miles de dólares por información que condujo a la captura o muerte de sus líderes.” Las autoridades calculan que el grupo guerrillero que una vez se pensó tenía unos 17.000 combatientes ahora se ha reducido a 10.000 y ha

⁸⁸ Testimony of General James T. Hill, Commander, United States Southern Command, hearing of the House Armed Services Committee: “Fiscal Year 2005 National Defense Authorization budget request,” March 24 2004. En: Frida Berrigan, Jonathan Wingo, *The Bush Effect: U.S. Military Involvement in Latin America Rises Development and Humanitarian Aid Fall*, World Policy Institute, 4 de noviembre de 2005, fuente: <http://www.worldpolicy.org/projects/arms/reports/MilitaryAid-LA110405.html>

perdido a muchos de sus comandantes de campo más experimentados: dos líderes de alto rango fueron asesinados por sus propios hombres – al parecer después de haber aceptado dinero para hacerlo – y su líder histórico, Manuel Marulanda, ha muerto. El informe concluye que “cientos de guerrilleros también están dejando [las FARC] todos los meses”.⁸⁹ Sus problemas se habrían agravado con la muerte del segundo al mando, Raúl Reyes, en febrero-marzo de 2008 en el ataque colombiano en territorio ecuatoriano. La situación de las FARC, desde entonces, ha empeorado. Por lo tanto, es difícil encontrar una justificación seria para el significativo aumento de la militarización por sobre el Plan Colombia, cuando una de las principales razones para su establecimiento fue la amenaza de la guerrilla, que a juzgar por los éxitos proclamados por el gobierno colombiano, se ha convertido en algo mucho menos peligroso. Y, como lo hemos visto anteriormente, la producción y el tráfico de cocaína se han reducido – otra justificación clave de la política de militarización – (aunque siguen siendo problemas muy graves) sobre todo gracias a las enérgicas políticas y acciones, particularmente, de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

En toda esta maraña de semi-verdades, propaganda, calumnias y agresiva hostilidad hay un área estratégica de interés de EE.UU. que explica mejor las verdaderas razones de la militarización de la región que el Comando Sur ha iniciado: el petróleo. La economía norteamericana es un consumidor voraz de petróleo – cerca de 21 millones de barriles diarios en la actualidad⁹⁰ – y las cuatro principales fuentes de energía externas de petróleo a EE.UU. se sitúan en el hemisferio occidental. El Comando del Sur tiene una opinión muy clara sobre esto y que especifica en su documento Estrategia de Comando 2016 Alianza para las Américas, donde se expresa en cifras bastante dramáticas, la verdadera prioridad del Comando, lo que resta importancia a cualquiera otra consideración:

“... Tres (Canadá, México y Venezuela) de los cuatro principales proveedores de energía extranjeros a EE.UU. se encuentran en el Hemisferio Occidental. Según la Coalición Energía Barata y Confiable, EE.UU. necesitará 31 por ciento más de petróleo y 62 por ciento más de gas natural en las próximas dos décadas. En la medida que EE.UU. necesite más petróleo y más gas, América Latina, con sus grandes reservas de petróleo y producción y suministro de petróleo y gas, se está convirtiendo en líder mundial en energía. Debemos trabajar juntos para garantizar estos recursos energéticos y la infraestructura de apoyo para hacer posible la prosperidad regional”.⁹¹

⁸⁹ Juan Forero, *15 hostages rescued in Colombia*, “The Washington Post”, 3 de julio de 2008, fuente: http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/07/02/AR2008070202502_2.html?sid=ST2008070202995

⁹⁰ Nation Master, fuente: http://www.nationmaster.com/graph/ene_oil_con-energy-oil-consumption

⁹¹ SOUTHCOM, *Command Strategy 2016 Partnership for the Americas*, fuente: <http://www.southcom.mil/AppsSC/files/0UI011175252190.pdf>

Resulta irónico la utilización de este lenguaje colectivo (“debemos trabajar juntos”) y flagrantemente falso (“para hacer posible la prosperidad regional”), dada la amenazante y vigorosa política actual de expansión del poder militar norteamericano en la región, y el legendario intervencionismo norteamericano en los asuntos internos de todos los países de la región, sin excepción. La economía norteamericana que estaba acostumbrada a obtener todo el petróleo – y otras materias primas – que necesitaba de América Latina durante la mayor parte del siglo 20, se enfrenta actualmente a tres obstáculos principales para continuar el flujo de petróleo barato desde su patio trasero: (a) el fuerte nacionalismo de sus vecinos del sur, especialmente su principal proveedor regional, Venezuela, (b) el intenso proceso de integración política y económica en el Sur, que está reduciendo drásticamente la influencia económica y política de Washington en el hemisferio y, (c) el surgimiento de formidables rivales de los norteamericanos que ofrecen a la región créditos, tecnología, inversiones, mercados e incluso armamentos. Frente a tales desafíos a su posición global, la élite norteamericana parece haber llegado a la conclusión de que es necesario recurrir a métodos más vigorosos (léase militares) para mantener su hegemonía sobre la región.

En caso de duda, basta con echar un vistazo a las cifras que hablan por sí mismas: “Para el año 2006, el gasto global en Financiamiento Militar Extranjero luego de disminuir a US \$ 4,5 millones de dólares, tras haber alcanzado un máximo de US \$ 6 billones en 2003. Pero la ayuda militar a América Latina ha aumentado más de 34 veces sus niveles del año 2000, a US \$ 122 millones sólo en el año 2006”.⁹²

A principios de julio de 2010, el Congreso de Costa Rica, dominado por fuerzas políticas de derecha, aprobó permitir a EE.UU. el desplegar una fuerza de 7.000 soldados, 200 helicópteros y 46 buques de guerra, aparentemente para ayudar a erradicar el tráfico de drogas. El acuerdo, justificado con la más que dudosa “guerra contra las drogas”, permitió un despliegue masivo de fuerza militar norteamericana en Costa Rica hasta finales de diciembre de 2010.

Esta decisión ha causado gran inquietud en Costa Rica, que muchos ven como una violación de la soberanía del país. Costa Rica abolió su ejército en 1948, y es difícil entender la razón de tal grado de militarización en un país desmilitarizado. El despliegue de una fuerza militar tan masiva en Costa Rica deja a Nicaragua rodeada por el sur por las fuerzas militares norteamericanas en la base de Soto Cano, en Honduras, al norte, por las masivas fuerzas militares norteamericanas en Costa Rica y la base militar norteamericana en El Salvador, en Comalapa, y al oeste por el despliegue masivo de la fuerza militar también norteamericana en Haití y la base naval de EE.UU.

⁹² Frida Berrigan y Jonathan Wingo, *The Bush Effect...*, *op. cit.*

en Guantánamo, Cuba. Asimismo, la intensa militarización de México deja a Guatemala rodeada por fuerzas militares norteamericanas en el norte, sur (Soto Cano, Comalapa), y el oeste (Haití, Guantánamo).

CONCLUSIONES

Ninguna de las razones oficiales dadas por los portavoces de EE.UU. y Colombia para establecer siete bases militares de EE.UU. en Colombia (operaciones contra el narcotráfico), justifica tal aumento del despliegue militar norteamericano: en primer lugar, los informes oficiales de Colombia señalan que los guerrilleros que operan en su territorio han sido seriamente debilitados, la cantidad de combatientes ha disminuido drásticamente y la organización ha sido infiltrada hasta los más altos niveles y, en segundo lugar, la producción y el tráfico de cocaína en general han disminuido considerablemente (incluso en la propia Colombia). Pero aun sin las siete bases militares del ACD no sólo hay ya una fuerte presencia militar de EE.UU. en Colombia, sino que hay que destacar que el ACD se firmó no a fin de llevar a cabo operaciones contra el narcotráfico, sino para aumentar considerablemente la movilidad del alcance aéreo norteamericano en las Américas, con Venezuela, objetivamente, como el blanco principal.

El secreto con que el ACD se firmó fue tal que los principales órganos institucionales de Colombia y EE.UU. fueron mantenidos en la oscuridad, lo que lleva a muchos a la conclusión de que las bases son para mucho más que la lucha contra el narcotráfico y operaciones de contrainsurgencia en Colombia. La reactivación de la IV Flota, creada en 1943 bajo condiciones de guerra mundial e intensa actividad de submarinos alemanes en el Caribe que llevó al hundimiento de cerca de 30 tanques de petróleo, es decir, condiciones de guerra extremas, hace que su restablecimiento en tiempo de paz sea un hecho alarmante y que lleva a la conclusión de que EE.UU. se está preparando para la guerra en la región.

A todo esto debe agregarse que el presidente conservador de Panamá se ha comprometido a permitir que EE.UU. tenga acceso al menos a once instalaciones militares de Panamá en el Atlántico y en la costa del Pacífico. Desde las bases norteamericanas en Aruba aviones de guerra han despegado de Curazao y han violado el espacio aéreo de Venezuela, por lo menos 14 veces recientemente, lo que para muchos confirma el carácter ofensivo de militarización norteamericana en Colombia y en la región, y la ineludible conclusión de que Venezuela es el blanco principal.

El Comando Sur, como se menciona en muchos de sus informes anuales, justifica esta masiva expansión militar norteamericana en la región con la supuesta amenaza que representaría una inexistente alianza de “narcoguerrillas”, “terroristas islámicos” y “populistas radicales” a quienes se acusa de “inflamar

sentimientos antinorteamericanos” en la región y que contarían con el apoyo de “narco-Estados” o “naciones que se están convirtiendo en narco-Estados”. Los sucesivos jefes del Comando Sur, al dar testimonio en las comisiones del Congreso norteamericano, se han referido repetidamente a Bolivia y Venezuela como potenciales o reales ‘narco-Estados’, etiqueta que, curiosamente, nunca han usado al referirse a Colombia. La caracterización de Venezuela y Bolivia como “narco-Estados” y las acusaciones de connivencia con la “narcoguerrilla” y “terroristas islámicos” se ubican completamente dentro de la retórica del “Eje del mal”, un marco político muy perturbador, que se utilizó para justificar el desencadenamiento de la guerra en contra de Irak y Afganistán.

Así entonces, sobre la base de un supuesto aumento en el tráfico de drogas a través de su territorio, se acusa a Venezuela de connivencia y de beneficiarse financieramente de ese comercio ilícito. Varios comités del Congreso norteamericanos han emitido informes que se refieren a Venezuela, en particular, como un “narco-Estado”, sin embargo, no sólo jamás se ha producido evidencia sólida para respaldar tales acusaciones (incluyendo al Comando Sur), sino que además esas denuncias contradicen los informes anuales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Desde el año 2000, Estados Unidos ha invertido aproximadamente 11 billones de dólares en asistencia a programas antinarcóticos en América Latina y, aunque ha habido algún progreso en la disminución de la cantidad de cultivos de coca en Colombia, la estimación más reciente (192.000 hectáreas en 2008) fue sólo el 4 por ciento inferior a la media de 22 años y 5 por ciento inferior a la media de los últimos cinco años (2004–2008). Por otra parte, la estimación de 2008 de 192.000 hectáreas fue casi idéntica a la estimación para el año 2000 (190.000 hectáreas), año en que comenzó el Plan Colombia. En resumen, Colombia es la principal fuente de tráfico de drogas – con todas sus corrosivas ramificaciones de violencia, corrupción, etc. – además de una década de fuerte militarización que no ha logrado su erradicación. El despliegue de 16.000 marines en Haití, usando como pretexto la dislocación del país debido al terrible terremoto que causó unas 300.000 víctimas fatales, además de equipo militar pesado de todo tipo, confirma la vocación militarista que anima a los estrategas de Washington y, especialmente, del Pentágono. El acuerdo con Costa Rica de estacionar 7.000 soldados norteamericanos, además de un par de centenas de helicópteros y varias decenas de buques de guerra, confirma la impresión de que el Pentágono y sectores del Departamento de Estado norteamericanos están dispuestos a buscar cualquier estrategia con tal de expandir la presencia militar en su “patio trasero”.

Afortunadamente, las tendencias políticas positivas en la región se han robustecido, especialmente luego de la elección de Dilma Rousseff en Brasil. Tal vez uno de los desarrollos más positivos sea la restauración de relaciones diplo-

máticas y económicas entre Colombia y Venezuela gracias, en gran medida, a la iniciativa de Juan Manuel Santos, pero también a la actitud altamente flexible de Hugo Chávez, que ha buscado por todos los medios mantener las mejores relaciones posibles con sus vecinos colombianos. De momento, el ACD entre Colombia y Washington ha sido nulificado (por lo menos temporalmente), lo que ha reducido la tensión entre estos dos vecinos significativamente. Pero la profundidad de la crisis económica norteamericana no augura desarrollos políticos positivos para la próxima elección presidencial. La perspectiva de la elección de un presidente de la corriente de extrema derecha del Tea Party, probablemente llevará a un aumento de la agresividad norteamericana y a una intensificación de la militarización. Por ello se debe desmilitarizar la región cerrando tantas bases norteamericanas como se pueda. De otra forma, la paz será seriamente amenazada en todo el hemisferio.

BIBLIOGRAFÍA

- Comini Nicolás, *El rol del Consejo de Defensa de la UNASUR en los últimos conflictos regionales*, "Nueva Sociedad", núm. 230, noviembre-diciembre, 2010.
- Esquivel Christina, Serna Paulina, *Unsettling Revelations Regarding U.S. Lease of Colombian Military Bases*, COHA Research Associates, may 2009.
- Galeano Eduardo, *Las Venas Abiertas de América Latina*, Siglo XXI Editores, S.A. de C.V, México 2004.
- Suárez Henry, *Intervenciones de Estados Unidos en América Latina*, Manifiesto Press, Londres 2010.